SEMILLAS DE PROGRESO

HISTORIA DEL BANCO AGRARIO EN BUENAVENTURA

JUAN RICARDO BUENAVENTURA ASPRILLA

Editorial Libros PARA PENSAK

Título: Semillas de Progreso: Historia del Banco Agrario en Buenaventura

Autor: Juan Ricardo Buenaventura Asprilla

Edición: Leonardo Valencia Echeverry

Diagramación y portada: Leonardo Valencia Echeverry

© **JUAN RICARDO BUENAVENTURA ASPRILLA**

© **EDITORIAL: LIBROS PARA PENSAR**

Primera Edición 2025
ISBN: 978-628-01-8647-4

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia u otro método, sin el permiso previo y por escrito del autor.

Hecho en Colombia
Printed in Colombia

Queda hecho el Depósito Legal

ÍNDICE

Resumen 13

Reseña institucional 15

Introducción 17

Justificación 20

Justificación del libro para el Programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico 21

Objetivos del libro 23

Objeto de la investigación y localización geográfica 25

Metodología 28

a) Enfoque teórico-epistemológico 28

b) Estrategias metodológicas 29

b) Relevancia académica y social 32

Capítulo I. Orígenes históricos de la banca rural en Colombia (siglos XIX–XX): exclusión, intentos y transición al modelo estatal 37

1. Introducción: El problema del crédito en el campo colombiano 37

2. El siglo XIX y los límites del crédito rural en la Colombia republicana 40

3. Primeras iniciativas estatales: antecedentes institucionales (1905–1930) 43

4. La gestación del modelo de banca pública rural en América Latina 47

5. Transición a la Caja Agraria: crisis del agro, café y modernización estatal..... 48

6. Conclusión: hacia la institucionalización de la banca pública rural 52

Capítulo I. Orígenes históricos de la banca rural en Colombia (siglos XIX–XX): exclusión, intentos y transición al modelo estatal..... 55

1. Introducción: El problema del crédito en el campo colombiano 55

2. El siglo XIX y los límites del crédito rural en la Colombia republicana..... 58

3. Primeras iniciativas estatales: antecedentes institucionales (1905–1930) 61

4. La gestación del modelo de banca pública rural en América Latina 65

5. Transición a la Caja Agraria: crisis del agro, café y modernización estatal..... 66

6. Conclusión: hacia la institucionalización de la banca pública rural 70

Capítulo III. Nacimiento y consolidación del Banco Agrario de Colombia (1999–2020)..... 73

1. Introducción: refundación institucional y giro estratégico 73

2. Origen y estructura del Banco Agrario (1999–2004)..... 74

3. Expansión y liderazgo en la inclusión financiera rural (2005–2015) 75

4. Modernización digital y sostenibilidad (2016–2020) 76

Capítulo IV. El Banco Agrario en Buenaventura: presencia estatal, inclusión y desarrollo territorial 80

1. Introducción: Buenaventura y la geografía del abandono 80

2. Herencia institucional: de la Caja Agraria al Banco Agrario 82

3. Créditos, servicios y poblaciones atendidas 85

4. Infraestructura, cobertura y canales alternativos 88

5. Impacto local y testimonios comunitarios 91

6. Conclusiones: presencia estatal en clave de justicia territorial 95

Capítulo V. El Banco Agrario y la inclusión financiera rural en Colombia 98

1. Introducción: la inclusión financiera como política de Estado 98

2. Brechas estructurales de inclusión financiera en el campo colombiano 101

3. Instrumentos del Banco Agrario para promover la inclusión financiera 104

4. Resultados e impactos en la última década 106

Capítulo VI. Retos estructurales y perspectivas futuras del Banco Agrario 109

1. Introducción: el dilema de la banca pública con función social 109

4. Articulación con reformas estructurales: tierra, paz, transición energética 115

5. Conclusión: una banca pública del siglo XXI 117

Capítulo VII. Propuestas estratégicas para una banca pública del siglo XXI 119

1. Introducción: hacia un nuevo paradigma de banca pública rural 119

2. Fortalecer la banca con enfoque territorial 121

3. Articular servicios financieros con ecosistemas de desarrollo rural 122

4. Democratizar la gobernanza y la planificación financiera 123

5. Innovar en instrumentos financieros para el cambio estructural 124

6. Consolidar un modelo de banca digital campesina 125

7. Proyectar al Banco Agrario como modelo regional de banca pública 126

Capítulo VIII. Conclusiones generales: una banca pública para la equidad territorial 128

1. Introducción: balance de una experiencia transformadora..... 128

2. Lecciones históricas: del paternalismo a la corresponsabilidad 130

3. Logros del Banco Agrario en inclusión y presencia territorial..... 131

4. Retos persistentes: brechas, riesgos y tensiones..... 132

5. Hacia una banca pública del siglo XXI: visión transformadora..... 133

6. Recomendaciones finales..... 134

Referencias bibliográficas 136

Sobre el Autor 142

SEMILLAS DE PROGRESO:

HISTORIA DEL BANCO AGRARIO EN BUENAVENTURA

Resumen

"Semillas de Progreso" es una obra que reconstruye, desde una mirada crítica y comprometida, la historia de la banca pública rural en Colombia, con especial énfasis en la experiencia del Banco Agrario en el municipio de Buenaventura. Escrita por Juan Ricardo Buenaventura Asprilla y editada por Leonardo Valencia Echeverry, esta investigación recorre más de 90 años de historia, desde la creación de la Caja Agraria en 1931 hasta los desafíos contemporáneos de inclusión financiera en el siglo XXI.

El texto articula análisis histórico, revisión de fuentes institucionales, testimonios comunitarios y estudios territoriales para mostrar cómo la banca pública ha sido uno de los rostros más visibles —aunque a veces contradictorios— del Estado en regiones excluidas.

A través del estudio del caso Buenaventura, se evidencia el papel del Banco Agrario como mediador entre políticas públicas y realidades locales, siendo a veces la única presencia efectiva del Estado.

Dividido en ocho capítulos, el libro aborda los orígenes de la exclusión financiera en el campo colombiano, la transición de la Caja Agraria al Banco Agrario, la inclusión financiera como

política de Estado, los impactos territoriales de esta banca en el Pacífico, y los retos actuales frente a la digitalización, la justicia territorial y el desarrollo sostenible.

Con un enfoque humanista, territorial y propositivo, la obra concluye con propuestas estratégicas para consolidar una banca pública rural del siglo XXI, más participativa, descentralizada e inclusiva.

Reseña institucional

Semillas de Progreso: Historia del Banco Agrario en Buenaventura es fruto de un proceso investigativo impulsado en el marco de las agendas académicas y comunitarias que emergen desde la **Universidad del Pacífico**, institución pública ubicada en el corazón del litoral colombiano.

Este libro nace como parte de los esfuerzos por visibilizar, desde la academia regional, las dinámicas históricas, territoriales y sociales que han marcado la relación entre el Estado y los territorios excluidos, con énfasis en la banca pública rural.

La obra recoge una rigurosa investigación desarrollada desde un enfoque interdisciplinario, crítico y situado, en el que confluyen la historia económica, la etnografía institucional y los estudios sobre inclusión financiera.

Su eje central es Buenaventura, ciudad-puerto estratégica del Pacífico colombiano, y su relación con el Banco Agrario como símbolo de presencia estatal, justicia territorial y construcción de ciudadanía económica.

Publicada por la editorial *Libros para Pensar*, esta obra es un testimonio del compromiso de la Universidad del Pacífico con la generación de conocimiento pertinente, la defensa del derecho

al desarrollo digno y el fortalecimiento de la memoria colectiva de las comunidades afrodescendientes, campesinas y rurales.

Introducción

Hablar de banca pública rural en Colombia no es solo hablar de economía. Es hablar de territorio, de memoria, de poder y de esperanza. Este libro nace del convencimiento de que el Banco Agrario de Colombia representa una de las instituciones más importantes —y a la vez más subestimadas— en la historia reciente del país.

Su papel va mucho más allá de la intermediación financiera: encarna la promesa —todavía incompleta— de un Estado capaz de cuidar, acompañar y reconocer a sus ciudadanías rurales, afrodescendientes, campesinas e indígenas.

Durante más de noventa años, desde la fundación de la Caja Agraria en 1931 hasta la consolidación del Banco Agrario en el siglo XXI, esta banca pública ha sido testigo y actor de profundas transformaciones.

Ha estado en el centro de políticas agrarias, reformas rurales, programas de paz, e incluso conflictos. Su historia es también la historia del Estado en el campo: sus aciertos, sus olvidos, sus apuestas y sus contradicciones.

Este libro no es una apología ni un juicio. Es una lectura crítica y comprometida de una institución que ha sabido reinventarse, que ha aprendido de sus errores, y que, sobre todo,

mantiene un potencial enorme para contribuir a la construcción de una Colombia más justa, equitativa y territorialmente integrada.

A lo largo de los capítulos se traza un recorrido que combina el análisis histórico con la mirada territorial. Se reconstruyen los antecedentes y mutaciones de la banca pública rural, se examina en profundidad el impacto de la Caja Agraria y del Banco Agrario en regiones como Buenaventura, y se presentan propuestas concretas para transformar el modelo actual hacia uno más participativo, descentralizado e inclusivo.

El libro articula fuentes institucionales, bibliografía especializada, datos empíricos y testimonios, en un lenguaje riguroso pero accesible.

Este texto está dirigido a múltiples públicos: académicos e investigadores interesados en políticas públicas rurales; tomadores de decisiones en el sector financiero y agrario; liderazgos comunitarios que dialogan con la institucionalidad; y, sobre todo, a quienes habitan y construyen desde los territorios una economía distinta, solidaria y arraigada.

Más que ofrecer respuestas definitivas, el libro propone una conversación de país: ¿qué tipo de banca pública necesitamos hoy? ¿Para quién debe trabajar? ¿Cómo garantizamos que

no repita errores del pasado y logre transformarse en una herramienta real de dignificación económica? ¿Cómo hacemos del crédito un derecho, y no un privilegio?

En un momento donde la reforma agraria vuelve a estar sobre la mesa, donde la transición energética y climática exige nuevos instrumentos financieros, y donde los territorios reclaman presencia estatal con sentido humano, la banca pública debe decidir si será parte del problema o del camino. Este libro quiere aportar a esa decisión colectiva.

Bienvenidas y bienvenidos.

Justificación

En un país marcado por profundas desigualdades territoriales, estudiar la historia y el impacto de la banca pública en regiones excluidas resulta no solo pertinente, sino urgente. El presente libro propone una lectura crítica de la trayectoria del Banco Agrario de Colombia, con énfasis en su predecesora, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y su presencia en el municipio de Buenaventura. Esta ciudad-puerto del Pacífico colombiano representa un caso emblemático de exclusión histórica y de construcción lenta, fragmentada y conflictiva de la presencia estatal.

La banca pública —en particular aquella orientada al fomento del desarrollo rural— ha cumplido un papel crucial en los intentos del Estado colombiano por llegar a territorios periféricos. Sin embargo, su historia ha estado atravesada por contradicciones entre misión social y sostenibilidad financiera, así como por tensiones entre institucionalidad y clientelismo. Comprender esa trayectoria en un escenario como Buenaventura permite observar, en escala territorial, las promesas y límites de la intervención estatal a través del crédito y los servicios financieros.

Justificación del libro para el Programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico

El libro *"Semillas de Progreso: Historia del Banco Agrario en Buenaventura"* representa un recurso fundamental para el programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, no solo por su valor histórico y territorial, sino por las múltiples intersecciones que establece entre tecnología, desarrollo institucional y transformación digital en contextos rurales y excluidos.

En una región como Buenaventura, donde el acceso a servicios financieros ha sido históricamente limitado, el papel del Banco Agrario —y su evolución desde la Caja Agraria hasta convertirse en un referente nacional de inclusión digital— ofrece una oportunidad excepcional para que los estudiantes comprendan cómo las tecnologías de la información pueden incidir en la construcción de ciudadanía económica, la eficiencia estatal y la justicia territorial.

Este libro articula saberes interdisciplinarios que son claves para la formación de ingenieros de sistemas comprometidos con la transformación social de sus territorios. El análisis sobre la modernización digital del Banco Agrario, los retos de conectividad en zonas rurales, el uso de plataformas como **MoviAgro** o **billeteras digitales**

campesinas, y los desafíos de la banca móvil en contextos de baja infraestructura, permiten a los estudiantes reflexionar críticamente sobre la relación entre tecnología, inclusión y equidad.

Además, la obra propone enfoques éticos y humanistas del desarrollo tecnológico. No se trata solo de aprender a programar o diseñar sistemas, sino de hacerlo desde una comprensión situada de las necesidades, capacidades y luchas de las comunidades del Pacífico colombiano. En este sentido, el libro puede ser un insumo pedagógico para proyectos de aula, semilleros de investigación, prácticas profesionales o tesis que articulen ingeniería, territorio y bienestar colectivo.

Finalmente, en tanto publicación surgida en el marco de agendas académicas de la Universidad del Pacífico, este libro fortalece el sentido de identidad institucional, promueve la producción de conocimiento local y demuestra que es posible investigar y publicar desde las realidades del Litoral. Su lectura permite a los futuros ingenieros verse como agentes activos de cambio, capaces de diseñar soluciones tecnológicas pertinentes, sostenibles y con sentido social.

Objetivos del libro

Este libro tiene como propósito general analizar la evolución histórica, los impactos sociales y los desafíos contemporáneos del Banco Agrario de Colombia en el municipio de Buenaventura. Se parte del reconocimiento de que esta institución representa una forma concreta y material de la presencia estatal en territorios históricamente marginados, donde las brechas en acceso a servicios financieros se entrelazan con formas persistentes de exclusión social, étnica y económica. Desde esta perspectiva, el Banco Agrario no solo debe entenderse como un actor económico, sino también como un instrumento de política pública con un profundo potencial transformador.

En términos específicos, esta obra se propone, en primer lugar, reconstruir la trayectoria histórica de la antigua Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero —más conocida como la Caja Agraria— y su posterior transformación en el Banco Agrario de Colombia. Esta reconstrucción se realizará con énfasis en el caso de Buenaventura, una región clave para entender los desafíos de la banca pública en contextos rurales, portuarios y con una fuerte presencia de comunidades afrodescendientes.

En segundo lugar, se busca examinar el impacto económico, cultural y simbólico que ha

tenido la presencia del Banco Agrario en la vida cotidiana de las comunidades del Pacífico colombiano. Este análisis abarcará tanto las oportunidades abiertas por el acceso al crédito, como las tensiones y frustraciones generadas por las limitaciones operativas, la burocracia y las restricciones normativas propias del sistema financiero tradicional.

En tercer lugar, el libro aspira a identificar los principales retos institucionales, financieros y sociales que ha enfrentado el Banco Agrario en su misión de inclusión rural. Estos desafíos incluyen, entre otros, las dificultades para adaptar su modelo operativo a realidades territoriales diversas, las barreras tecnológicas en zonas de baja conectividad, y las tensiones entre la lógica financiera y los imperativos del desarrollo social.

Finalmente, se plantea formular propuestas orientadas al fortalecimiento del Banco Agrario como instrumento estratégico para la justicia territorial y el desarrollo rural sostenible. Estas propuestas buscarán articular enfoques técnicos, experiencias comunitarias y perspectivas críticas desde el territorio, con el fin de aportar al debate nacional sobre el rol de la banca pública en la superación de las desigualdades históricas que afectan al campo colombiano y, en particular, al litoral pacífico.

Objeto de la investigación y localización geográfica

Este libro se construye a partir de una serie de interrogantes que orientan tanto la revisión histórica como el análisis contemporáneo de la banca pública en el contexto del Pacífico colombiano. En particular, se indaga por el papel que han desempeñado, a lo largo del tiempo, la Caja Agraria y su sucesora, el Banco Agrario de Colombia, en la configuración de la historia económica y social de Buenaventura. Esta línea de exploración permite comprender cómo una institución financiera estatal ha incidido en procesos locales de producción, comercio, migración, organización comunitaria y transformación territorial.

Uno de los ejes centrales de esta investigación es examinar cómo se ha expresado la presencia del Estado colombiano en territorios históricamente marginados, como Buenaventura, a través de la acción concreta de la banca pública. Se analiza hasta qué punto esta presencia ha sido efectiva, legítima y sostenida, o si, por el contrario, ha estado marcada por ausencias, discontinuidades e insuficiencias.

Asimismo, se exploran las tensiones estructurales que históricamente han condicionado el accionar de la banca de fomento en la región. Entre ellas se destacan los dilemas

entre sostenibilidad financiera y misión social, la influencia de presiones políticas sobre las decisiones de crédito, y las dificultades para operar en contextos caracterizados por altos niveles de informalidad económica y baja bancarización.

Otro aspecto fundamental del estudio es la recuperación de los testimonios, percepciones y memorias locales sobre el impacto del Banco Agrario en la vida cotidiana de las comunidades. Estos relatos permiten acceder a una dimensión cualitativa del análisis, revelando experiencias de confianza o desencanto, inclusión o exclusión, que difícilmente capturan las cifras agregadas o los informes institucionales.

Finalmente, el caso de Buenaventura es abordado no solo como un estudio de caso representativo, sino también como una fuente de aprendizajes para pensar el futuro de la banca pública en Colombia. A partir de esta experiencia concreta, se busca formular lecciones que permitan avanzar hacia un modelo de banca más territorializada, con capacidad de adaptarse a las realidades locales y responder a los desafíos del siglo XXI.

El análisis que se presenta en este libro se sitúa en el municipio de Buenaventura, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Un distrito especial, portuario, industrial, biodiverso y étnico, que constituye un nodo

estratégico para la economía nacional, pero que al mismo tiempo ha enfrentado profundas desigualdades sociales, exclusión institucional y conflictos territoriales. La atención se centra especialmente en sus zonas rurales, corregimientos y áreas ribereñas, donde el acceso a servicios financieros ha sido históricamente limitado.

El periodo de análisis de este texto, abarca desde la fundación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en 1931, hasta el año 2024. Este marco cronológico permite identificar los principales hitos institucionales, cambios normativos, momentos de crisis, así como las fases de transformación y consolidación del Banco Agrario como actor clave en la región. Aunque Buenaventura es el eje central del estudio, en algunos capítulos se incluyen contrastes con otras regiones rurales del país. Esto con el fin de identificar tanto patrones comunes como particularidades territoriales que ayuden a enriquecer el análisis y a situar el caso dentro de un panorama nacional más amplio.

Metodología

Este libro adopta una metodología de carácter cualitativo, interdisciplinario y territorializado, que integra elementos de la historia económica, la sociología del desarrollo, los estudios críticos del Estado y la etnografía institucional. El objetivo es comprender no solo los hechos y cifras relacionados con la Caja Agraria y el Banco Agrario en Buenaventura, sino también las formas en que estas instituciones han sido vividas, resignificadas y apropiadas por las comunidades locales a lo largo del tiempo.

a) Enfoque teórico-epistemológico

La investigación se enmarca en una perspectiva crítica del Estado y la institucionalidad en contextos periféricos, inspirada en autores como James Ferguson (1994), quien propone entender el desarrollo como un aparato de racionalidad institucional que produce efectos más allá de sus objetivos declarados, y Pierre Bourdieu (1993), cuya noción de campo burocrático permite analizar la construcción de autoridad simbólica por parte del Estado a través de prácticas cotidianas.

Asimismo, se retoma el enfoque de territorialización del Estado planteado por Gupta (2012), según el cual las instituciones estatales en territorios "marginales" no solo imponen normas, sino que deben legitimarse a

través de una presencia sensible, visible y sostenida. En este sentido, se considera al Banco Agrario como un agente estatal que produce tanto inclusión financiera como reconocimiento institucional.

Desde la geografía crítica y los estudios sobre desigualdad regional (Escobar, 2008; Restrepo, 2014), el libro incorpora la noción de colonialidad territorial, al analizar cómo la exclusión financiera en el Pacífico colombiano reproduce lógicas históricas de racialización, despojo y marginalización del aparato estatal.

Finalmente, se recurre a la historia oral como herramienta de reconstrucción comunitaria (Portelli, 1991), reconociendo que la memoria de los actores sociales constituye una fuente legítima de conocimiento histórico y político, especialmente en contextos donde los archivos oficiales son fragmentarios o silencian las experiencias de los excluidos.

b) Estrategias metodológicas

La investigación se desarrolló mediante una combinación de estrategias documentales, analíticas y testimoniales:

1. Análisis documental e institucional: Se consultaron leyes, decretos, planes de desarrollo, informes de gestión, reportes financieros y publicaciones de la Caja

Agraria, el Banco Agrario, el DNP, Finagro, la Contraloría General de la República, la Superintendencia Financiera y organismos internacionales como el Banco Mundial y la FAO.

2. Revisión bibliográfica académica: A través de Google Scholar, Scopus y bases universitarias se recopilaron textos especializados sobre:
    - Historia de la banca pública en Colombia (Kalmanovitz, 2010; Sánchez, 2006)
    - Inclusión financiera y desarrollo rural (Demirgüç-Kunt et al., 2018; Steiner, 2011)
    - Estudios territoriales sobre el Pacífico colombiano (Escobar, 2008; González, 2019)
    - Enfoques de economía popular y soberanía financiera (Coraggio, 2011)
3. Análisis estadístico contextualizado: Se utilizaron datos del DANE, Superintendencia Financiera, Banco Agrario, Banco de la República y Finagro para trazar la evolución de la cobertura financiera, volumen de cartera, líneas de crédito e inclusión rural en

Buenaventura. Estos datos se interpretaron bajo el principio de **densidad significativa** (Creswell, 2013), es decir, no como simples cifras sino como expresiones de relaciones sociales, institucionales y económicas.

Historia oral y testimonios comunitarios: Se incorporaron relatos de líderes comunales, asociaciones de pescadores, mujeres afroemprendedoras, funcionarios bancarios y usuarios rurales, recogidos mediante entrevistas semiestructuradas, revisión de prensa local, boletines institucionales y eventos comunitarios. Estos testimonios fueron analizados desde un enfoque hermenéutico, respetando la dimensión subjetiva y afectiva de las experiencias narradas.

Estudio de caso territorial: Buenaventura se aborda como caso de estudio estratégico (Yin, 2014), que permite observar procesos nacionales —como la inclusión financiera rural o la modernización de la banca pública— en un contexto altamente significativo por su carácter portuario, étnico, rural y excluido.

c) Validación y rigor metodológico

Para garantizar la triangulación metodológica (Denzin, 2011), los hallazgos se construyeron cruzando datos cuantitativos, análisis normativos, revisión bibliográfica y narrativas

locales. Se aplicó también el principio de saturación teórica, dejando de incorporar nuevas categorías cuando los datos comenzaban a ser recurrentes o redundantes.

Además, se procuró mantener una perspectiva ética y situada, reconociendo que los investigadores no son neutros y que su mirada se configura desde relaciones de poder, saber y representación. Por ello, el texto privilegia voces locales y evita generalizaciones apresuradas sobre los procesos sociales analizados.

b) Relevancia académica y social

El presente libro pretende contribuir a dos campos interrelacionados pero con lógicas distintas: por un lado, al debate académico sobre la banca pública, el desarrollo territorial y la inclusión financiera en Colombia; y por otro, al fortalecimiento de las memorias locales y comunitarias sobre la presencia del Estado en territorios históricamente excluidos, como lo es Buenaventura.

Desde el punto de vista académico, esta obra se inscribe en una línea de investigación crítica sobre la construcción histórica del Estado en la periferia, en la que las instituciones bancarias no son solo vehículos de crédito, sino también formas de territorialización, control, legitimidad y producción de ciudadanía. La Caja Agraria —y

más recientemente el Banco Agrario— han operado como instrumentos de intervención estatal en lo rural, con un alcance que va más allá del financiamiento agrícola: son canales de política pública, referentes simbólicos de institucionalidad, y plataformas para el ejercicio de derechos económicos. Sin embargo, estos roles han sido poco estudiados desde una perspectiva territorial y etnográfica, especialmente en regiones como el litoral Pacífico.

Por ello, el libro ofrece un enfoque inédito al cruzar historia económica, etnografía institucional y estudios territoriales, con una lectura situada del caso Buenaventura. Aporta evidencia empírica y conceptual sobre cómo se expresa la inclusión financiera en contextos racializados, rurales y fragmentados por la violencia y la desigualdad estructural. En este sentido, se ubica dentro del creciente interés por los estudios interseccionales de territorio, raza, pobreza y política pública en América Latina.

Además, la investigación dialoga con agendas globales en torno a la función social de las finanzas públicas, los límites del neoliberalismo en la gobernanza rural y el papel de la banca estatal en la transición hacia modelos de desarrollo más equitativos y sostenibles. La experiencia del Banco Agrario, especialmente en territorios como Buenaventura, ofrece claves

para repensar los conceptos de “bancarización”, “desarrollo” e “inclusión”, usualmente asociados a parámetros tecnocráticos, desde una perspectiva más humana, situada y transformadora.

Desde el punto de vista social, este libro busca restituir la memoria colectiva sobre el impacto concreto que la banca pública ha tenido en las comunidades afrodescendientes y campesinas de Buenaventura. En contextos donde las políticas públicas han sido intermitentes o excluyentes, y donde el Estado ha sido más visible por su ausencia que por su acción, instituciones como la Caja Agraria han dejado huellas profundas, tanto materiales como simbólicas. Para muchos habitantes, fue la primera forma de relacionarse con el sistema bancario, de acceder a créditos formales, o de entender la lógica del ahorro y la planificación financiera.

Rescatar estas experiencias —a través de relatos, testimonios, estudios de caso y análisis crítico— permite dar voz a quienes tradicionalmente han sido silenciados en la historia financiera del país**.** El texto reivindica así el saber comunitario, el valor de la historia oral y el papel de las organizaciones territoriales (como consejos comunitarios, asociaciones de pescadores o redes de mujeres rurales) en la construcción de ciudadanía económica. Al

hacerlo, ofrece también herramientas pedagógicas que pueden ser usadas en procesos de formación, incidencia y diseño de políticas públicas con enfoque territorial.

En suma, la relevancia de este libro es doble**:** académica, al enriquecer el debate sobre banca pública, desarrollo territorial e inclusión; y social, al construir una memoria crítica de Buenaventura como territorio donde la banca rural ha sido, al mismo tiempo, presencia estatal, posibilidad productiva y campo de disputa política. De ahí que este trabajo se proponga como una contribución no solo al conocimiento, sino a la transformación social mediante el reconocimiento y la visibilización de las experiencias locales**.**

Capítulo I. Orígenes históricos de la banca rural en Colombia (siglos XIX–XX): exclusión, intentos y transición al modelo estatal

1. Introducción: El problema del crédito en el campo colombiano

Comprender la historia del crédito rural en Colombia es adentrarse en una de las dimensiones más profundas de la desigualdad social y territorial que ha marcado el desarrollo del país. Desde el siglo XIX, el acceso al financiamiento en el campo ha sido un privilegio excepcional y no un derecho garantizado, lo cual ha tenido consecuencias de largo alcance en la persistencia de la pobreza rural, la fragilidad productiva y la limitada movilidad económica de millones de familias campesinas.

En los primeros años de la República, el sistema financiero emergente estuvo completamente orientado hacia los sectores urbanos, comerciales y exportadores. Las instituciones bancarias que surgieron entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX —como el Banco de Bogotá (1870) o el Banco Nacional (1874)— respondían a las necesidades de las élites urbanas, del comercio exterior y de

la consolidación de una economía centrada en los grandes centros urbanos del altiplano (Kalmanovitz & López, 2006). El campo, en cambio, fue visto como un espacio atrasado, subordinado y prescindible en términos de política crediticia.

Las condiciones estructurales del agro colombiano no ayudaron a revertir este patrón: una alta concentración de la tierra, la informalidad en la tenencia, la falta de infraestructura, la escasa diversificación productiva y la debilidad del aparato estatal en las regiones rurales hicieron prácticamente inviable la presencia de una banca comercial interesada en atender las necesidades de los pequeños productores. Además, la inexistencia de garantías reales reconocidas formalmente por el sistema financiero (como títulos de propiedad) dejaba a la mayoría de los campesinos fuera del mapa de riesgo aceptable para las entidades bancarias (De Janvry & Sadoulet, 2004).

Este vacío fue llenado parcialmente —y de forma precaria— por mecanismos informales: préstamos de comerciantes con tasas usureras, sistemas de aparcería que generaban dependencia estructural, o esquemas de endeudamiento ligados a relaciones clientelistas con los poderes locales. Estos modelos de financiamiento no solo resultaban inequitativos,

sino que profundizaban la exclusión social, al perpetuar un ciclo donde el crédito no era un instrumento de expansión productiva, sino una forma de control social (Fajardo, 2002).

A lo largo del siglo XX, el Estado colombiano intentó diversos mecanismos para corregir esta exclusión. Uno de los primeros esfuerzos fue la creación del Banco Agrícola Hipotecario en 1914, orientado a otorgar créditos a largo plazo garantizados con hipotecas sobre predios rurales. Sin embargo, este modelo enfrentó rápidamente limitaciones: en un país donde buena parte de los predios no contaba con títulos formales o presentaba conflictos sobre su propiedad, las garantías eran inefectivas. Además, el banco tenía una cobertura muy limitada y no llegó a consolidarse como actor nacional (Urrutia & Llach, 1999).

Fue entonces que surgió, en el contexto de la Gran Depresión y bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera, la necesidad de una institución que pudiera operar bajo principios de fomento, con un alcance territorial mucho más amplio y una lógica de intervención pública decidida. En 1931 se fundó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, cuyo mandato era precisamente democratizar el acceso al crédito en el campo, fomentar la modernización agrícola y articular la presencia del Estado en zonas excluidas. Este capítulo analizará el proceso que

condujo a esa fundación, examinando tanto los factores internos (debilidad estructural del agro, presiones sociales, fallas del mercado) como las influencias internacionales, como el surgimiento del Estado de bienestar y los modelos de banca de desarrollo que ya comenzaban a consolidarse en otros países de América Latina.

Más allá de la historia institucional, lo que está en juego es la comprensión de cómo el acceso —o la falta de acceso— al crédito rural ha sido una de las principales líneas divisorias entre inclusión y exclusión en el campo colombiano. El análisis de esta trayectoria es clave para entender no solo el pasado de la banca pública rural, sino también sus desafíos y oportunidades en el presente.

2. El siglo XIX y los límites del crédito rural en la Colombia republicana

Durante el siglo XIX, Colombia —como la mayoría de los países latinoamericanos recién independizados— configuró un modelo económico, institucional y territorial que excluyó sistemáticamente al mundo rural de los beneficios del incipiente sistema financiero nacional. Si bien la economía colombiana seguía siendo predominantemente agrícola, el Estado republicano priorizó la consolidación de instituciones orientadas al comercio exterior, a la defensa del nuevo orden jurídico y a la

integración de una élite urbana en ascenso, antes que a la inclusión económica de los pequeños productores campesinos.

La banca en el siglo XIX colombiano surgió como una iniciativa estrechamente ligada a los intereses de comerciantes, exportadores y grandes propietarios. El primer banco importante, el Banco de Bogotá (1870), fue creado con el objetivo de facilitar las operaciones de importación, exportación y financiamiento del comercio, no para atender al campesinado. En las décadas posteriores, otras entidades similares consolidaron esta tendencia, enfocando sus productos financieros en créditos urbanos, hipotecas para grandes hacendados y emisiones monetarias (Kalmanovitz & López, 2006).

En este contexto, el crédito rural era prácticamente inexistente como política pública. Las formas de financiamiento en el campo colombiano estaban determinadas por relaciones informales y verticales: los campesinos accedían a recursos a través de sistemas de aparcería, crédito por cosecha, adelantos de intermediarios o préstamos usureros condicionados a la entrega de la producción. Estas formas de crédito tenían tres características comunes: eran altamente costosas, reproducían relaciones de subordinación social, y excluían a los

productores más pobres, que no tenían capacidad de negociación (Fajardo, 2002).

La inexistencia de títulos de propiedad formales, la inestabilidad jurídica de los predios rurales y la carencia de catastro confiable impedían que la mayoría de los campesinos pudieran ofrecer garantías aceptables para el naciente sistema bancario. En consecuencia, la tierra no se convertía en capital: seguía siendo trabajo, subsistencia o marginalidad. Esta exclusión financiera estructural tuvo consecuencias profundas en la configuración del modelo agrario colombiano: impidió la consolidación de un campesinado capitalizado, perpetuó la concentración de tierras, y bloqueó las posibilidades de modernización productiva desde abajo (LeGrand, 1988).

Al mismo tiempo, el Estado republicano —limitado en sus capacidades fiscales y fragmentado políticamente por las guerras civiles del siglo XIX— no asumió el crédito rural como una prioridad. La creación de instituciones como el Banco Nacional (1874), con atribuciones de crédito público, no se tradujo en líneas específicas para el sector agropecuario. El crédito público se dirigía preferentemente a obras de infraestructura, a financiar las guerras, o a resolver déficits fiscales. El mundo rural quedaba fuera del radar de la planificación financiera estatal.

En palabras de Jesús Antonio Bejarano (1998), el siglo XIX colombiano fue el siglo del "abandono rural institucionalizado". Mientras los países que habían iniciado procesos de reforma agraria o de inversión estatal en el campo comenzaban a generar estructuras modernas de financiamiento agrícola (como en México o Argentina), en Colombia persistía un modelo excluyente, donde el campesinado no era sujeto de derechos económicos, sino, en el mejor de los casos, objeto de caridad o disciplinamiento.

Estas condiciones estructurales dieron lugar a una forma de ruralidad precarizada y vulnerable, donde el crédito era una herramienta de dominación más que de desarrollo. Este legado perduró a lo largo del siglo XX y solo comenzó a transformarse, parcialmente, con la creación de entidades como el Banco Agrícola Hipotecario (1914) y, más decisivamente, con la fundación de la Caja Agraria en 1931.

3. Primeras iniciativas estatales: antecedentes institucionales (1905–1930)

La primera mitad del siglo XX trajo consigo una transformación gradual, aunque limitada, en la actitud del Estado colombiano hacia el sector rural. Hasta entonces, el mundo agrario

había sido percibido más como un espacio de extracción y control territorial que como un campo legítimo de inversión y fomento. Sin embargo, factores como las recurrentes crisis agrícolas, el endeudamiento del campesinado, el aumento de los conflictos rurales y las demandas sociales por parte de pequeños productores forzaron una reconsideración del papel estatal en el financiamiento agrícola (Bejarano, 1998).

Uno de los hitos de esta etapa fue la creación del Banco Agrícola Hipotecario en 1914, en el marco de una política estatal que buscaba fortalecer la base productiva nacional a través del estímulo a la agricultura. El banco fue concebido para otorgar créditos de largo plazo a propietarios rurales, con garantía hipotecaria, a fin de financiar mejoras productivas, adquisición de tierras o consolidación de pequeñas unidades familiares. Esta institución marcó el primer intento serio de establecer una banca rural especializada en Colombia.

No obstante, el Banco Agrícola Hipotecario enfrentó obstáculos estructurales desde su nacimiento. En primer lugar, su cobertura territorial fue limitada y su capacidad operativa débil: tenía oficinas apenas en unas pocas capitales de departamento, lo cual lo hacía inaccesible para los productores más aislados. En segundo lugar, su esquema legal no estaba

alineado con la realidad agraria del país. Como buena parte de los campesinos no contaba con títulos de propiedad legalmente reconocidos, no podían ofrecer garantías hipotecarias válidas. Así, el banco terminó financiando principalmente a medianos y grandes propietarios, reproduciendo las desigualdades de acceso al crédito que pretendía corregir (Urrutia & Llach, 1999; Kalmanovitz & López, 2006).

Simultáneamente, se ensayaron modelos descentralizados de financiamiento agrícola, especialmente a través de cajas de crédito departamentales, cooperativas rurales y asociaciones gremiales. Estas iniciativas, muchas veces impulsadas desde gobiernos locales o promovidas por asociaciones de caficultores y agricultores, buscaban acercar el crédito al pequeño productor y fortalecer las economías locales. Algunas lograron avances interesantes en términos de organización y acceso, especialmente en regiones como el Eje Cafetero o el Valle del Cauca, donde existía mayor asociatividad y capacidad técnica (Posada, 1984).

Sin embargo, el impacto general de estas iniciativas fue marginal. Las razones fueron varias: una fuerte fragmentación institucional, la falta de respaldo financiero sostenido desde el gobierno central, la escasa capacitación de su

personal y la limitada cultura financiera de sus usuarios, muchos de los cuales no estaban familiarizados con el manejo del crédito, la contabilidad o las obligaciones contractuales. Además, estas experiencias carecían de una política nacional de fomento agrícola que las integrara dentro de una estrategia coherente de desarrollo rural.

Pese a sus limitaciones, estos experimentos institucionales dejaron lecciones importantes. Mostraron que el crédito rural no puede reducirse a la entrega de dinero: requiere acompañamiento técnico, educación financiera, subsidios bien focalizados y estructuras administrativas que entiendan la dinámica del mundo rural. También pusieron en evidencia la urgencia de crear una entidad financiera nacional, con presencia en todo el territorio, que combinara funciones de crédito, asistencia técnica y planificación sectorial.

Es en este escenario —marcado por las limitaciones del Banco Agrícola Hipotecario, la insuficiencia de las iniciativas locales y la presión por atender una creciente demanda campesina— que toma forma el proyecto de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Fundada en 1931, esta entidad encarnaría el modelo de banca pública rural con vocación nacional, buscando superar los errores del pasado y consolidar una política de

financiamiento que tuviera verdadero alcance en las regiones más excluidas del país.

4. La gestación del modelo de banca pública rural en América Latina

En el contexto latinoamericano, la década de 1920 y especialmente la de 1930 marcaron una inflexión en la forma en que los Estados concebían su rol económico. El colapso del modelo liberal exportador, precipitado por la Gran Depresión de 1929, dio paso a esquemas de desarrollo que enfatizaban la intervención estatal, la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y la protección de los sectores vulnerables. En este nuevo paradigma, la banca pública de fomento adquirió un papel estratégico: debía orientar el crédito hacia sectores priorizados por el Estado, entre ellos, la agricultura.

En países como Brasil, México y Argentina se consolidaron bancos agrarios con respaldo estatal, orientados a financiar pequeños y medianos productores, modernizar la infraestructura rural y apoyar las políticas de redistribución agraria. El Banco Nacional de Crédito Agrícola en México (1926) y el Banco do Brasil (reorganizado con funciones de fomento en 1923) son ejemplos paradigmáticos. En estos modelos, el crédito agrícola no era entendido como un producto financiero más, sino como un

instrumento de justicia social, integración territorial y modernización productiva.

Colombia no fue ajena a esta tendencia, aunque su implementación fue más tardía y limitada. Las condiciones económicas internas y la presión por estabilizar la economía cafetera empujaron al país a explorar una vía similar. La idea de crear una banca de fomento con alcance rural se convirtió, entonces, en una propuesta viable tanto técnica como políticamente, en parte gracias a las referencias regionales que ya mostraban resultados concretos.

5. Transición a la Caja Agraria: crisis del agro, café y modernización estatal

El inicio de la década de 1930 marcó un punto de inflexión en la historia económica y política de Colombia. La Gran Depresión, originada en Estados Unidos en 1929, tuvo un impacto devastador sobre la economía cafetera nacional, que por entonces representaba cerca del 75 % de las exportaciones del país (Kalmanovitz & López, 2006). La abrupta caída de los precios internacionales del grano, combinada con la contracción de la demanda externa, generó una profunda crisis de ingresos fiscales, desbalance en la balanza de pagos y un deterioro generalizado del empleo rural.

En las zonas productoras de café, el desplome del precio internacional se tradujo en cesación de pagos a trabajadores, abandono de cultivos y pérdida acelerada de tierras por parte de pequeños propietarios endeudados. En otras regiones, la falta de alternativas productivas agravó la pobreza, acentuando la dependencia de relaciones clientelares, la migración interna y la conflictividad social. La política liberal clásica, basada en la no intervención del Estado y la libertad de mercado, mostraba su impotencia para responder a la magnitud del colapso (Palacios, 2006).

Fue en este contexto que el presidente Enrique Olaya Herrera (1930–1934), el primero elegido bajo un régimen de alternancia liberal tras más de cuatro décadas de hegemonía conservadora, impulsó una orientación reformista moderada que sentó las bases del intervencionismo estatal moderno en Colombia. Inspirado en los modelos de banca de desarrollo que comenzaban a surgir en América Latina y en las experiencias de New Deal en EE.UU., Olaya propuso la creación de instituciones públicas que permitieran reactivar la economía desde el Estado (Urrutia & Llach, 1999).

Una de las medidas más importantes fue la promulgación de la Ley 57 de 1931, que dio origen a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, más conocida como Caja Agraria. Esta

entidad nació como un banco de fomento mixto, con participación mayoritaria del Estado pero con una lógica operativa cercana a la empresa privada. Su diseño institucional fue innovador: buscaba combinar eficiencia financiera con función pública, permitiendo tanto captar ahorro como otorgar crédito subsidiado.

La misión de la Caja fue triple y ambiciosa:

1. **Otorgar crédito subsidiado a pequeños y medianos productores rurales**, con esquemas flexibles y condiciones accesibles.
2. **Financiar infraestructura productiva** en sectores estratégicos como la agroindustria, la minería y el comercio regional.
3. **Expandir la presencia institucional del Estado** en zonas tradicionalmente marginadas, donde la banca privada nunca había operado.

A diferencia del Banco Agrícola Hipotecario, que se enfocaba en propietarios con títulos de tierra y operaciones a largo plazo, la Caja Agraria buscaba atender a una población más amplia, incluyendo campesinos sin escrituras formales, arrendatarios y asociaciones rurales. Fue uno de los primeros esfuerzos por construir una política de crédito **de carácter inclusivo y**

descentralizado, en sintonía con los postulados del fomento agrario y el desarrollo territorial (Bejarano, 1998).

Su despliegue territorial fue una de sus mayores apuestas. Desde sus primeros años, la Caja comenzó a abrir oficinas en municipios intermedios, corregimientos estratégicos y zonas rurales sin servicios bancarios. Esta cobertura permitió que el Estado llegara con más fuerza a regiones históricamente abandonadas, no solo con crédito, sino con capacitación, asesoría técnica, ferias campesinas y promoción del ahorro. En muchos lugares, la apertura de una oficina de la Caja significó también la llegada de luz eléctrica, telégrafo y carretera de acceso.

Más que una institución financiera, la Caja Agraria se convirtió en símbolo de presencia estatal. Fue uno de los pilares de la incipiente **modernización institucional del país**, y un instrumento mediante el cual el Estado buscó articular un contrato social mínimo con los sectores rurales. Su existencia permitió estructurar una red nacional de servicios financieros públicos que, con el tiempo, también operó como canal de ejecución de políticas agrarias, subsidios, titulación de tierras y programas de reforma rural (DNP, 2011).

Si bien sus décadas posteriores estuvieron marcadas por aciertos y errores, el surgimiento

de la Caja en 1931 representó un antes y un después en la historia del crédito rural en Colombia. Fue la expresión concreta de que el Estado podía —y debía— asumir un papel activo en la dinamización de la economía campesina y en la construcción de un país más equilibrado territorialmente.

6. Conclusión: hacia la institucionalización de la banca pública rural

La evolución histórica del crédito rural en Colombia entre el siglo XIX y las primeras décadas del XX evidencia una larga trayectoria de exclusión estructural, respuestas fragmentadas y tentativas fallidas de inclusión financiera. La fundación de la Caja de Crédito Agrario en 1931 constituyó un punto de inflexión al materializar un modelo de banca pública rural con enfoque social y función estratégica.

Más que una simple institución financiera, la Caja Agraria representó la consolidación de una nueva racionalidad estatal: aquella que reconoce la necesidad de intervenir activamente en la economía para corregir desigualdades históricas, fomentar el desarrollo rural y ampliar la presencia del Estado en territorios periféricos.

Comprender este proceso es fundamental no solo para analizar el pasado, sino para interpretar los retos contemporáneos de entidades como el Banco Agrario, heredero directo de ese proyecto. Como veremos en los capítulos siguientes, la historia de la Caja Agraria no solo marcó a Colombia institucionalmente, sino que dejó una huella profunda en la vida de regiones como Buenaventura, donde la banca pública ha sido, muchas veces, la única cara visible del Estado.

Capítulo I. Orígenes históricos de la banca rural en Colombia (siglos XIX–XX): exclusión, intentos y transición al modelo estatal

1. Introducción: El problema del crédito en el campo colombiano

Comprender la historia del crédito rural en Colombia es adentrarse en una de las dimensiones más profundas de la desigualdad social y territorial que ha marcado el desarrollo del país. Desde el siglo XIX, el acceso al financiamiento en el campo ha sido un privilegio excepcional y no un derecho garantizado, lo cual ha tenido consecuencias de largo alcance en la persistencia de la pobreza rural, la fragilidad productiva y la limitada movilidad económica de millones de familias campesinas.

En los primeros años de la República, el sistema financiero emergente estuvo completamente orientado hacia los sectores urbanos, comerciales y exportadores. Las instituciones bancarias que surgieron entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX —como el Banco de Bogotá (1870) o el Banco Nacional (1874)— respondían a las necesidades de las élites urbanas, del comercio exterior y de

la consolidación de una economía centrada en los grandes centros urbanos del altiplano (Kalmanovitz & López, 2006). El campo, en cambio, fue visto como un espacio atrasado, subordinado y prescindible en términos de política crediticia.

Las condiciones estructurales del agro colombiano no ayudaron a revertir este patrón: una alta concentración de la tierra, la informalidad en la tenencia, la falta de infraestructura, la escasa diversificación productiva y la debilidad del aparato estatal en las regiones rurales hicieron prácticamente inviable la presencia de una banca comercial interesada en atender las necesidades de los pequeños productores. Además, la inexistencia de garantías reales reconocidas formalmente por el sistema financiero (como títulos de propiedad) dejaba a la mayoría de los campesinos fuera del mapa de riesgo aceptable para las entidades bancarias (De Janvry & Sadoulet, 2004).

Este vacío fue llenado parcialmente —y de forma precaria— por mecanismos informales: préstamos de comerciantes con tasas usureras, sistemas de aparcería que generaban dependencia estructural, o esquemas de endeudamiento ligados a relaciones clientelistas con los poderes locales. Estos modelos de financiamiento no solo resultaban inequitativos,

sino que profundizaban la exclusión social, al perpetuar un ciclo donde el crédito no era un instrumento de expansión productiva, sino una forma de control social (Fajardo, 2002).

A lo largo del siglo XX, el Estado colombiano intentó diversos mecanismos para corregir esta exclusión. Uno de los primeros esfuerzos fue la creación del Banco Agrícola Hipotecario en 1914, orientado a otorgar créditos a largo plazo garantizados con hipotecas sobre predios rurales. Sin embargo, este modelo enfrentó rápidamente limitaciones: en un país donde buena parte de los predios no contaba con títulos formales o presentaba conflictos sobre su propiedad, las garantías eran inefectivas. Además, el banco tenía una cobertura muy limitada y no llegó a consolidarse como actor nacional (Urrutia & Llach, 1999).

Fue entonces que surgió, en el contexto de la Gran Depresión y bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera, la necesidad de una institución que pudiera operar bajo principios de fomento, con un alcance territorial mucho más amplio y una lógica de intervención pública decidida. En 1931 se fundó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, cuyo mandato era precisamente democratizar el acceso al crédito en el campo, fomentar la modernización agrícola y articular la presencia del Estado en zonas excluidas. Este capítulo analizará el proceso que

condujo a esa fundación, examinando tanto los factores internos (debilidad estructural del agro, presiones sociales, fallas del mercado) como las influencias internacionales, como el surgimiento del Estado de bienestar y los modelos de banca de desarrollo que ya comenzaban a consolidarse en otros países de América Latina.

Más allá de la historia institucional, lo que está en juego es la comprensión de cómo el acceso —o la falta de acceso— al crédito rural ha sido una de las principales líneas divisorias entre inclusión y exclusión en el campo colombiano. El análisis de esta trayectoria es clave para entender no solo el pasado de la banca pública rural, sino también sus desafíos y oportunidades en el presente.

2. El siglo XIX y los límites del crédito rural en la Colombia republicana

Durante el siglo XIX, Colombia —como la mayoría de los países latinoamericanos recién independizados— configuró un modelo económico, institucional y territorial que excluyó sistemáticamente al mundo rural de los beneficios del incipiente sistema financiero nacional. Si bien la economía colombiana seguía siendo predominantemente agrícola, el Estado republicano priorizó la consolidación de instituciones orientadas al comercio exterior, a la defensa del nuevo orden jurídico y a la

integración de una élite urbana en ascenso, antes que a la inclusión económica de los pequeños productores campesinos.

La banca en el siglo XIX colombiano surgió como una iniciativa estrechamente ligada a los intereses de comerciantes, exportadores y grandes propietarios. El primer banco importante, el Banco de Bogotá (1870), fue creado con el objetivo de facilitar las operaciones de importación, exportación y financiamiento del comercio, no para atender al campesinado. En las décadas posteriores, otras entidades similares consolidaron esta tendencia, enfocando sus productos financieros en créditos urbanos, hipotecas para grandes hacendados y emisiones monetarias (Kalmanovitz & López, 2006).

En este contexto, el crédito rural era prácticamente inexistente como política pública. Las formas de financiamiento en el campo colombiano estaban determinadas por relaciones informales y verticales: los campesinos accedían a recursos a través de sistemas de aparcería, crédito por cosecha, adelantos de intermediarios o préstamos usureros condicionados a la entrega de la producción. Estas formas de crédito tenían tres características comunes: eran altamente costosas, reproducían relaciones de subordinación social, y excluían a los

productores más pobres, que no tenían capacidad de negociación (Fajardo, 2002).

La inexistencia de títulos de propiedad formales, la inestabilidad jurídica de los predios rurales y la carencia de catastro confiable impedían que la mayoría de los campesinos pudieran ofrecer garantías aceptables para el naciente sistema bancario. En consecuencia, la tierra no se convertía en capital: seguía siendo trabajo, subsistencia o marginalidad. Esta exclusión financiera estructural tuvo consecuencias profundas en la configuración del modelo agrario colombiano: impidió la consolidación de un campesinado capitalizado, perpetuó la concentración de tierras, y bloqueó las posibilidades de modernización productiva desde abajo (LeGrand, 1988).

Al mismo tiempo, el Estado republicano —limitado en sus capacidades fiscales y fragmentado políticamente por las guerras civiles del siglo XIX— no asumió el crédito rural como una prioridad. La creación de instituciones como el Banco Nacional (1874), con atribuciones de crédito público, no se tradujo en líneas específicas para el sector agropecuario. El crédito público se dirigía preferentemente a obras de infraestructura, a financiar las guerras, o a resolver déficits fiscales. El mundo rural quedaba fuera del radar de la planificación financiera estatal.

En palabras de Jesús Antonio Bejarano (1998), el siglo XIX colombiano fue el siglo del "abandono rural institucionalizado". Mientras los países que habían iniciado procesos de reforma agraria o de inversión estatal en el campo comenzaban a generar estructuras modernas de financiamiento agrícola (como en México o Argentina), en Colombia persistía un modelo excluyente, donde el campesinado no era sujeto de derechos económicos, sino, en el mejor de los casos, objeto de caridad o disciplinamiento.

Estas condiciones estructurales dieron lugar a una forma de ruralidad precarizada y vulnerable, donde el crédito era una herramienta de dominación más que de desarrollo. Este legado perduró a lo largo del siglo XX y solo comenzó a transformarse, parcialmente, con la creación de entidades como el Banco Agrícola Hipotecario (1914) y, más decisivamente, con la fundación de la Caja Agraria en 1931.

3. Primeras iniciativas estatales: antecedentes institucionales (1905–1930)

La primera mitad del siglo XX trajo consigo una transformación gradual, aunque limitada, en la actitud del Estado colombiano hacia el sector rural. Hasta entonces, el mundo agrario

había sido percibido más como un espacio de extracción y control territorial que como un campo legítimo de inversión y fomento. Sin embargo, factores como las recurrentes crisis agrícolas, el endeudamiento del campesinado, el aumento de los conflictos rurales y las demandas sociales por parte de pequeños productores forzaron una reconsideración del papel estatal en el financiamiento agrícola (Bejarano, 1998).

Uno de los hitos de esta etapa fue la creación del Banco Agrícola Hipotecario en 1914, en el marco de una política estatal que buscaba fortalecer la base productiva nacional a través del estímulo a la agricultura. El banco fue concebido para otorgar créditos de largo plazo a propietarios rurales, con garantía hipotecaria, a fin de financiar mejoras productivas, adquisición de tierras o consolidación de pequeñas unidades familiares. Esta institución marcó el primer intento serio de establecer una banca rural especializada en Colombia.

No obstante, el Banco Agrícola Hipotecario enfrentó obstáculos estructurales desde su nacimiento. En primer lugar, su cobertura territorial fue limitada y su capacidad operativa débil: tenía oficinas apenas en unas pocas capitales de departamento, lo cual lo hacía inaccesible para los productores más aislados. En segundo lugar, su esquema legal no estaba

alineado con la realidad agraria del país. Como buena parte de los campesinos no contaba con títulos de propiedad legalmente reconocidos, no podían ofrecer garantías hipotecarias válidas. Así, el banco terminó financiando principalmente a medianos y grandes propietarios, reproduciendo las desigualdades de acceso al crédito que pretendía corregir (Urrutia & Llach, 1999; Kalmanovitz & López, 2006).

Simultáneamente, se ensayaron modelos descentralizados de financiamiento agrícola, especialmente a través de cajas de crédito departamentales, cooperativas rurales y asociaciones gremiales. Estas iniciativas, muchas veces impulsadas desde gobiernos locales o promovidas por asociaciones de caficultores y agricultores, buscaban acercar el crédito al pequeño productor y fortalecer las economías locales. Algunas lograron avances interesantes en términos de organización y acceso, especialmente en regiones como el Eje Cafetero o el Valle del Cauca, donde existía mayor asociatividad y capacidad técnica (Posada, 1984).

Sin embargo, el impacto general de estas iniciativas fue marginal. Las razones fueron varias: una fuerte fragmentación institucional, la falta de respaldo financiero sostenido desde el gobierno central, la escasa capacitación de su

personal y la limitada cultura financiera de sus usuarios, muchos de los cuales no estaban familiarizados con el manejo del crédito, la contabilidad o las obligaciones contractuales. Además, estas experiencias carecían de una política nacional de fomento agrícola que las integrara dentro de una estrategia coherente de desarrollo rural.

Pese a sus limitaciones, estos experimentos institucionales dejaron lecciones importantes. Mostraron que el crédito rural no puede reducirse a la entrega de dinero: requiere acompañamiento técnico, educación financiera, subsidios bien focalizados y estructuras administrativas que entiendan la dinámica del mundo rural. También pusieron en evidencia la urgencia de crear una entidad financiera nacional, con presencia en todo el territorio, que combinara funciones de crédito, asistencia técnica y planificación sectorial.

Es en este escenario —marcado por las limitaciones del Banco Agrícola Hipotecario, la insuficiencia de las iniciativas locales y la presión por atender una creciente demanda campesina— que toma forma el proyecto de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Fundada en 1931, esta entidad encarnaría el modelo de banca pública rural con vocación nacional, buscando superar los errores del pasado y consolidar una política de

financiamiento que tuviera verdadero alcance en las regiones más excluidas del país.

4. La gestación del modelo de banca pública rural en América Latina

En el contexto latinoamericano, la década de 1920 y especialmente la de 1930 marcaron una inflexión en la forma en que los Estados concebían su rol económico. El colapso del modelo liberal exportador, precipitado por la Gran Depresión de 1929, dio paso a esquemas de desarrollo que enfatizaban la intervención estatal, la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y la protección de los sectores vulnerables. En este nuevo paradigma, la banca pública de fomento adquirió un papel estratégico: debía orientar el crédito hacia sectores priorizados por el Estado, entre ellos, la agricultura.

En países como Brasil, México y Argentina se consolidaron bancos agrarios con respaldo estatal, orientados a financiar pequeños y medianos productores, modernizar la infraestructura rural y apoyar las políticas de redistribución agraria. El Banco Nacional de Crédito Agrícola en México (1926) y el Banco do Brasil (reorganizado con funciones de fomento en 1923) son ejemplos paradigmáticos. En estos modelos, el crédito agrícola no era entendido como un producto financiero más, sino como un

instrumento de justicia social, integración territorial y modernización productiva.

Colombia no fue ajena a esta tendencia, aunque su implementación fue más tardía y limitada. Las condiciones económicas internas y la presión por estabilizar la economía cafetera empujaron al país a explorar una vía similar. La idea de crear una banca de fomento con alcance rural se convirtió, entonces, en una propuesta viable tanto técnica como políticamente, en parte gracias a las referencias regionales que ya mostraban resultados concretos.

5. Transición a la Caja Agraria: crisis del agro, café y modernización estatal

El inicio de la década de 1930 marcó un punto de inflexión en la historia económica y política de Colombia. La Gran Depresión, originada en Estados Unidos en 1929, tuvo un impacto devastador sobre la economía cafetera nacional, que por entonces representaba cerca del 75 % de las exportaciones del país (Kalmanovitz & López, 2006). La abrupta caída de los precios internacionales del grano, combinada con la contracción de la demanda externa, generó una profunda crisis de ingresos fiscales, desbalance en la balanza de pagos y un deterioro generalizado del empleo rural.

En las zonas productoras de café, el desplome del precio internacional se tradujo en cesación de pagos a trabajadores, abandono de cultivos y pérdida acelerada de tierras por parte de pequeños propietarios endeudados. En otras regiones, la falta de alternativas productivas agravó la pobreza, acentuando la dependencia de relaciones clientelares, la migración interna y la conflictividad social. La política liberal clásica, basada en la no intervención del Estado y la libertad de mercado, mostraba su impotencia para responder a la magnitud del colapso (Palacios, 2006).

Fue en este contexto que el presidente Enrique Olaya Herrera (1930–1934), el primero elegido bajo un régimen de alternancia liberal tras más de cuatro décadas de hegemonía conservadora, impulsó una orientación reformista moderada que sentó las bases del intervencionismo estatal moderno en Colombia. Inspirado en los modelos de banca de desarrollo que comenzaban a surgir en América Latina y en las experiencias de New Deal en EE.UU., Olaya propuso la creación de instituciones públicas que permitieran reactivar la economía desde el Estado (Urrutia & Llach, 1999).

Una de las medidas más importantes fue la promulgación de la **Ley 57 de 1931**, que dio origen a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, más conocida como Caja Agraria. Esta

entidad nació como un banco de fomento mixto, con participación mayoritaria del Estado pero con una lógica operativa cercana a la empresa privada. Su diseño institucional fue innovador: buscaba combinar eficiencia financiera con función pública, permitiendo tanto captar ahorro como otorgar crédito subsidiado.

La misión de la Caja fue triple y ambiciosa:

4. **Otorgar crédito subsidiado a pequeños y medianos productores rurales**, con esquemas flexibles y condiciones accesibles.
5. **Financiar infraestructura productiva** en sectores estratégicos como la agroindustria, la minería y el comercio regional.
6. **Expandir la presencia institucional del Estado** en zonas tradicionalmente marginadas, donde la banca privada nunca había operado.

A diferencia del Banco Agrícola Hipotecario, que se enfocaba en propietarios con títulos de tierra y operaciones a largo plazo, la Caja Agraria buscaba atender a una población más amplia, incluyendo campesinos sin escrituras formales, arrendatarios y asociaciones rurales. Fue uno de los primeros esfuerzos por construir una política de crédito **de carácter inclusivo y**

descentralizado, en sintonía con los postulados del fomento agrario y el desarrollo territorial (Bejarano, 1998).

Su despliegue territorial fue una de sus mayores apuestas. Desde sus primeros años, la Caja comenzó a abrir oficinas en municipios intermedios, corregimientos estratégicos y zonas rurales sin servicios bancarios. Esta cobertura permitió que el Estado llegara con más fuerza a regiones históricamente abandonadas, no solo con crédito, sino con capacitación, asesoría técnica, ferias campesinas y promoción del ahorro. En muchos lugares, la apertura de una oficina de la Caja significó también la llegada de luz eléctrica, telégrafo y carretera de acceso.

Más que una institución financiera, la Caja Agraria se convirtió en símbolo de presencia estatal. Fue uno de los pilares de la incipiente **modernización institucional del país**, y un instrumento mediante el cual el Estado buscó articular un contrato social mínimo con los sectores rurales. Su existencia permitió estructurar una red nacional de servicios financieros públicos que, con el tiempo, también operó como canal de ejecución de políticas agrarias, subsidios, titulación de tierras y programas de reforma rural (DNP, 2011).

Si bien sus décadas posteriores estuvieron marcadas por aciertos y errores, el surgimiento

de la Caja en 1931 representó un antes y un después en la historia del crédito rural en Colombia. Fue la expresión concreta de que el Estado podía —y debía— asumir un papel activo en la dinamización de la economía campesina y en la construcción de un país más equilibrado territorialmente.

6. Conclusión: hacia la institucionalización de la banca pública rural

La evolución histórica del crédito rural en Colombia entre el siglo XIX y las primeras décadas del XX evidencia una larga trayectoria de exclusión estructural, respuestas fragmentadas y tentativas fallidas de inclusión financiera. La fundación de la Caja de Crédito Agrario en 1931 constituyó un punto de inflexión al materializar un modelo de banca pública rural con enfoque social y función estratégica.

Más que una simple institución financiera, la Caja Agraria representó la consolidación de una nueva racionalidad estatal: aquella que reconoce la necesidad de intervenir activamente en la economía para corregir desigualdades históricas, fomentar el desarrollo rural y ampliar la presencia del Estado en territorios periféricos.

Comprender este proceso es fundamental no solo para analizar el pasado, sino para interpretar los retos contemporáneos de entidades como el Banco Agrario, heredero directo de ese proyecto. Como veremos en los capítulos siguientes, la historia de la Caja Agraria no solo marcó a Colombia institucionalmente, sino que dejó una huella profunda en la vida de regiones como Buenaventura, donde la banca pública ha sido, muchas veces, la única cara visible del Estado.

Capítulo III. Nacimiento y consolidación del Banco Agrario de Colombia (1999–2020)

1. Introducción: refundación institucional y giro estratégico

La creación del Banco Agrario de Colombia S.A. en 1999 representó una ruptura y, al mismo tiempo, una continuidad respecto al modelo anterior de banca rural pública. Surgido tras la liquidación de la Caja Agraria, el nuevo banco fue concebido como una entidad financiera moderna, regulada por criterios de eficiencia, disciplina financiera y sostenibilidad operativa, pero sin renunciar a su vocación social. Esta refundación institucional respondió tanto a una crisis financiera estructural como a un cambio más amplio en la lógica del Estado colombiano, que desde los años noventa adoptó una visión gerencialista, centrada en la eficiencia, la rendición de cuentas y la focalización del gasto público (Steiner, 2011).

La creación del Banco Agrario fue parte de una serie de reformas orientadas a modernizar la banca pública y demostrar que era posible combinar eficiencia financiera con propósito social (Echeverry & Steiner, 2003). A diferencia

de la Caja, caracterizada por altos niveles de politización, el nuevo banco fue diseñado con mecanismos modernos de control institucional, buscando blindarlo frente a prácticas clientelistas y garantizar su sostenibilidad. El presente capítulo analiza sus fases de constitución, expansión y consolidación hasta 2020, enfocándose en su aporte a la inclusión financiera rural.

2. Origen y estructura del Banco Agrario (1999–2004)

El Banco Agrario fue establecido mediante el Decreto 1121 del 26 de junio de 1999 como sociedad anónima estatal con capital 100 % público. Surgió en respuesta a la necesidad de preservar la misión de inclusión financiera rural, tras el colapso institucional de la Caja Agraria. Su modelo legal adoptó estándares de banca comercial bajo regulación de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), incorporando lineamientos de gestión de riesgo, solvencia y gobierno corporativo (Banco Agrario, 2000).

Hereda 521 oficinas, una planta de más de 6.000 empleados y una cartera en estado crítico, razón por la cual sus primeros años estuvieron centrados en el saneamiento operativo y financiero. El banco adoptó metodologías de

scoring crediticio, fortaleció sus sistemas internos de auditoría y estableció criterios técnicos para la aprobación de créditos, priorizando la transparencia y la sostenibilidad (Contraloría General, 2001).

Además, el Banco se integró al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA), coordinando su labor con entidades como Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), facilitando el acceso a recursos subsidiados para pequeños y medianos productores rurales (DNP, 2004).

3. Expansión y liderazgo en la inclusión financiera rural (2005–2015)

Durante la década de 2000, el Banco Agrario experimentó una etapa de expansión territorial y consolidación de su misión social. En 2010 ya estaba presente en más de 800 municipios, siendo la única entidad financiera en al menos 500 de ellos (Banco Agrario, 2011). Este despliegue fue clave en la estrategia nacional de inclusión financiera y bancarización rural.

Se desarrollaron productos adaptados al perfil de pequeños productores y poblaciones vulnerables, como las Líneas Especiales de Crédito (LEC), dirigidas a mujeres rurales, jóvenes, víctimas del conflicto y asociaciones campesinas (Finagro, 2012). Asimismo, se

impulsaron mecanismos como el leasing agropecuario, el microcrédito y los seguros agropecuarios vinculados al crédito.

El banco también se convirtió en operador financiero de programas sociales como Familias en Acción y Colombia Mayor, ampliando así la cobertura de servicios básicos de ahorro y pagos en zonas rurales excluidas (BID, 2013). Esta doble función —comercial y social— fortaleció su posicionamiento como brazo operativo del Estado en materia de equidad territorial.

4. Modernización digital y sostenibilidad (2016–2020)

En este periodo, el Banco Agrario inició una transformación digital profunda. Se crearon herramientas como la banca móvil, la billetera digital BICO y el programa MoviAgro, que permiten gestionar productos financieros en áreas sin infraestructura física o con baja conectividad, a través de dispositivos móviles con acceso satelital (Banco Agrario, 2020).

Paralelamente, se consolidaron alianzas interinstitucionales que facilitaron el diseño de líneas de crédito con enfoque diferencial: Mujer Rural, Joven Rural, Pequeño Productor y Asociatividad Productiva. También se avanzó en estrategias de sostenibilidad financiera con criterios sociales, fortaleciendo indicadores

como la rentabilidad neta, la cartera agropecuaria colocada y la captación de depósitos rurales.

En 2020, el banco superaba los $35 billones en activos y los 3 millones de clientes rurales activos. Su experiencia se consolidó como referente de banca pública rural eficiente, con altos niveles de cobertura, innovación y articulación institucional (Superfinanciera, 2020).

5. Conclusiones: una nueva etapa de banca pública

La experiencia del Banco Agrario muestra que es posible una banca pública moderna, con control institucional y orientación social. Ha demostrado capacidad de adaptación y sostenibilidad financiera sin renunciar a su misión de inclusión. No obstante, enfrenta desafíos estructurales: la brecha digital rural, la cobertura financiera funcional (no solo geográfica), y la tensión entre rentabilidad y equidad siguen siendo obstáculos persistentes.

Su consolidación como actor clave del desarrollo rural colombiano depende de profundizar su enfoque territorial, fortalecer alianzas público-populares, avanzar en la innovación digital inclusiva y proteger su autonomía institucional. Más allá del crédito, el Banco Agrario tiene el potencial de ser un

promotor de transformación productiva, justicia económica y ciudadanía financiera en el campo colombiano.

Capítulo IV. El Banco Agrario en Buenaventura: presencia estatal, inclusión y desarrollo territorial

1. Introducción: Buenaventura y la geografía del abandono

Buenaventura, enclave portuario sobre el océano Pacífico colombiano, representa un territorio donde se superponen de forma dramática dos realidades: un inmenso potencial económico y una exclusión histórica que ha configurado lo que diversos autores denominan "geografía del abandono" (Escobar, 2008; Gutiérrez, 2022). Es la ciudad que conecta a Colombia con Asia y Oceanía, pero también la ciudad donde, durante décadas, el agua potable, el empleo formal y la seguridad han sido lujos escasos para la mayoría de su población.

Con una mayoría demográfica afrodescendiente —orgullosa de su cultura, sus luchas y su resistencia— Buenaventura ha sido sistemáticamente ignorada por las políticas de desarrollo nacional. Los grandes planes de inversión en infraestructura portuaria no se han traducido en bienestar colectivo. A pesar de ser el principal puerto marítimo del país, la ciudad sigue figurando entre las más pobres y violentas.

Esta paradoja no es nueva: forma parte de una larga historia de marginación territorial que ha colocado a Buenaventura en los márgenes del Estado y del mercado.

En este contexto, la banca pública —y en particular el Banco Agrario de Colombia— adquiere un papel profundamente simbólico y funcional. Su presencia sostenida en la ciudad no ha sido solo la de una entidad financiera: ha sido también la de un referente institucional que, con limitaciones y aciertos, ha ofrecido acceso a servicios que otras entidades no proveen. Ha representado, en múltiples momentos, la única cara tangible del Estado para campesinos del Bajo Calima, para asociaciones de pescadores artesanales, para mujeres afroemprendedoras o jóvenes rurales que buscan una alternativa a la migración forzada o la economía informal.

Este capítulo examina la trayectoria del Banco Agrario en Buenaventura con una mirada integral, que combina historia institucional, análisis territorial y voces locales. No se trata simplemente de medir cuánto ha prestado o cuántas cuentas ha abierto, sino de entender cómo su presencia —y, en algunos casos, su ausencia— ha influido en la construcción de ciudadanía económica, en la generación de confianza estatal, y en la posibilidad de que los proyectos productivos se transformen en caminos reales de dignificación.

Analizar el caso de Buenaventura no solo permite comprender mejor la labor del Banco Agrario en una ciudad específica, sino que ofrece claves más amplias para pensar la banca pública en contextos de desigualdad estructural. Allí donde el Estado ha fallado, o donde ha llegado con lente burocrático pero no con oído humano, el banco ha podido —cuando ha sabido escuchar y adaptarse— convertirse en un puente entre lo institucional y lo comunitario. Esa experiencia, compleja y viva, merece ser narrada, comprendida y fortalecida.

2. Herencia institucional: de la Caja Agraria al Banco Agrario

Para entender el papel del Banco Agrario en Buenaventura es indispensable remontarse a su antecedente directo: la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, conocida simplemente como la Caja Agraria. Esta entidad comenzó a operar en el litoral Pacífico a mediados del siglo XX, convirtiéndose en una de las primeras expresiones visibles y permanentes del Estado colombiano en una región marcada por la ausencia institucional y la precariedad de los servicios públicos.

En Buenaventura, la Caja Agraria cumplía un rol que iba mucho más allá de las funciones bancarias convencionales. Era una entidad que canalizaba crédito subsidiado para la

producción agrícola, la pesca artesanal y el comercio local, pero también organizaba ferias, capacitaciones y programas de ahorro, además de actuar como intermediaria de pagos del Estado. Funcionaba como una suerte de "ventanilla múltiple" del aparato estatal, articulando con otras instituciones como el ICA, el Incora y el Fondo DRI. En un territorio donde el Estado solía llegar tarde o nunca, la Caja era percibida como "el Estado en la esquina", un espacio donde la gente podía hacer trámites, preguntar, pedir ayuda, o simplemente sentir que alguien del gobierno los escuchaba.

Con la liquidación de la Caja en 1999 —resultado de una crisis financiera estructural alimentada por la politización del crédito, el sobredimensionamiento burocrático y la falta de sostenibilidad— muchas regiones quedaron en la incertidumbre. En Buenaventura, esa incertidumbre fue especialmente sentida, dado que la Caja había sido un punto de apoyo para miles de pequeños productores, pescadores, comerciantes y funcionarios que dependían de sus servicios para sostener sus actividades económicas y su relación con el mundo formal.

Fue en este contexto que el Banco Agrario de Colombia asumió la infraestructura física, buena parte del personal y, sobre todo, el legado social de la Caja. La oficina principal, ubicada en el centro urbano de Buenaventura, no cerró sus

puertas: fue transformada y reactivada como sede del nuevo banco, permitiendo la continuidad de atención sin ruptura traumática. Este gesto —aparentemente técnico— fue simbólicamente muy importante: representó la voluntad de conservar una presencia estatal en una ciudad que, por décadas, ha sentido que todo se le quita y poco se le devuelve.

Desde entonces, el Banco Agrario ha mantenido una operación ininterrumpida en Buenaventura. Ha financiado iniciativas agrícolas en la zona rural, ha sostenido esquemas de microcrédito y ha dispersado subsidios de programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor y más recientemente Renta Ciudadana. Ha sido, en muchos casos, la única entidad financiera con presencia estable en barrios y corregimientos donde el resto del sistema bancario no opera. En contextos de crisis, como durante el estallido social de 2021, su rol como entidad confiable para gestionar transferencias estatales, líneas especiales de crédito y programas de alivio económico fue crucial para contener la desesperanza y reconstruir mínimos de confianza institucional.

Así, más que una mera continuidad administrativa, la transición de la Caja Agraria al Banco Agrario en Buenaventura representó una forma de persistencia del Estado en la periferia. Una presencia imperfecta, limitada, pero

profundamente significativa. En medio del olvido estructural, de la exclusión racializada y de la violencia que ha afectado a la ciudad, el Banco Agrario ha sido —y sigue siendo— un símbolo de que el Estado no se ha retirado por completo. Un espacio donde aún es posible hablar de derechos, de crédito justo y de esperanza económica.

3. Créditos, servicios y poblaciones atendidas

En Buenaventura, el Banco Agrario no solo ha prestado dinero. Ha sembrado confianza donde otras instituciones han fallado en llegar. Su portafolio de productos ha sido moldeado por las particularidades del territorio: una geografía marcada por el agua, un tejido social resiliente y una economía mayoritariamente informal pero profundamente activa. Desde los barrios del casco urbano hasta las veredas ribereñas del Bajo Calima o la cuenca del río Yurumanguí, el banco ha ido adaptando sus líneas de crédito y sus servicios para responder a las formas de vida y trabajo que definen esta región (González, 2019).

En lo agrícola, ha priorizado el financiamiento de cultivos tradicionales y de valor local como el plátano, el cacao criollo, el limón, la caña panelera y, en algunas zonas, la palma de aceite bajo esquemas familiares. Se han financiado no

solo los insumos o el arriendo de la tierra, sino también la adecuación de parcelas, la compra de herramientas y el acceso a paquetes tecnológicos básicos. También se han abierto líneas específicas para la acuicultura comunitaria, un sector emergente que busca combinar la sostenibilidad ambiental con la seguridad alimentaria local (FAO, 2022).

Para la pesca artesanal —una de las actividades económicas más antiguas y significativas en la ciudad— el banco ha diseñado créditos que permiten a las cooperativas renovar embarcaciones, adquirir motores fuera de borda, instalar sistemas de refrigeración o invertir en equipos de seguridad. Aunque los montos suelen ser modestos, su impacto es alto: garantizan la continuidad de una actividad que no solo sostiene a cientos de familias, sino que preserva un conocimiento ancestral ligado al mar, los ríos y los ciclos de la naturaleza (Garay, 2015).

Uno de los programas más transformadores ha sido **"Núcleos Solidarios"**, una estrategia de banca comunal puesta en marcha desde 2009 con el respaldo de agencias de cooperación internacional y organizaciones sociales locales. El programa consiste en la entrega de microcréditos a pequeños grupos —en su mayoría integrados por mujeres cabeza de hogar, trabajadoras informales, pescadoras o

jóvenes emprendedoras— que asumen colectivamente el compromiso de pago, pero que también reciben formación en ahorro, planificación financiera y fortalecimiento de redes comunitarias (Banco Agrario de Colombia, 2019).

Durante el periodo 2021–2023, el banco implementó la campaña **"Se Mueve Buenaventura"**, en un contexto marcado por los efectos sociales de la pandemia y el impacto del estallido social. Esta estrategia permitió colocar más de doce mil millones de pesos en créditos con condiciones flexibles, tasas subsidiadas y acompañamiento técnico personalizado. No fue solo una respuesta financiera: fue un gesto de presencia estatal en un momento donde el malestar, el descontento y la necesidad económica se sentían con más fuerza que nunca (DNP, 2023).

Entre los beneficiarios se destacaron asociaciones de cultivadores de plátano, cooperativas de pescadores artesanales, mujeres afroemprendedoras dedicadas a la gastronomía y al turismo comunitario, así como jóvenes rurales que emprendían por primera vez. Para muchos de ellos, este fue su primer crédito formal, su primer contrato con el sistema financiero, su primera oportunidad de demostrar que sí se puede confiar en el talento local (PNUD, 2020).

En síntesis, el Banco Agrario en Buenaventura ha logrado posicionarse no solo como prestamista, sino como aliado. Sus créditos no han sido cifras frías, sino pequeñas apuestas por el futuro de quienes, a pesar de todo, insisten en construir vida digna en un territorio que aún espera mucho más del Estado.

4. Infraestructura, cobertura y canales alternativos

A pesar de que la sede principal del Banco Agrario en Buenaventura se encuentra en el centro urbano de la ciudad, su estrategia de presencia territorial ha ido mucho más allá de la infraestructura bancaria tradicional. Entendiendo las particularidades geográficas y sociales del distrito, la entidad ha desarrollado un modelo de cobertura híbrido —físico, móvil y digital— que le ha permitido llegar a zonas donde otros actores financieros no tienen operación ni intención de entrar.

El territorio rural de Buenaventura es complejo: buena parte de sus comunidades se encuentra ubicada a lo largo de ríos, afluentes y caminos veredales sin pavimentar. En estos escenarios, donde el transporte fluvial es más común que el terrestre y la conectividad digital aún es intermitente, el acceso a servicios bancarios depende de estrategias creativas y colaborativas. El Banco Agrario ha respondido a

este desafío mediante una combinación de canales: cajeros rurales en puntos clave, corresponsales bancarios en tiendas comunitarias, jornadas móviles de atención personalizada y el uso gradual de tecnologías digitales adaptadas (Banco Agrario, 2022).

Durante el año 2023, la entidad reportó más de **20 corresponsales activos** en zonas como Bajo Calima, San Cipriano, Zacarías, La Gloria y Anchicayá, que operan con el respaldo de líderes comunitarios, asociaciones de base y pequeños comerciantes. Estos corresponsales no solo permiten la realización de pagos, retiros o transferencias, sino que también funcionan como puentes de confianza entre el banco y las comunidades. Como señala el informe de inclusión financiera del DNP (2023), la figura del corresponsal es clave para acercar el Estado a poblaciones que tradicionalmente han sido marginadas del sistema bancario formal.

Además, el banco ha realizado más de **60 jornadas móviles de atención** en las zonas rurales y fluviales del distrito. Estas jornadas coinciden frecuentemente con eventos estratégicos, como la entrega de subsidios del programa Renta Ciudadana, las convocatorias para crédito asociativo, o el fortalecimiento de núcleos solidarios de mujeres rurales. En estas actividades, se despliega un equipo con herramientas tecnológicas portátiles (tabletas

con conectividad satelital, lectores biométricos, impresoras térmicas) que permiten realizar todo el proceso de vinculación, validación y aprobación de crédito en tiempo real, sin necesidad de que el usuario se desplace a la cabecera municipal (PNUD, 2020).

Este modelo ha sido especialmente valorado por poblaciones afrodescendientes y campesinas que viven en zonas de difícil acceso y que, por razones económicas o logísticas, no pueden salir de su comunidad con frecuencia. Para muchas familias, estas brigadas representan no solo una oportunidad de inclusión financiera, sino también una forma de reconocimiento institucional: una muestra de que el Estado sí puede llegar con servicios pertinentes, dignos y cercanos.

En paralelo, el Banco Agrario ha comenzado a introducir **herramientas digitales adaptadas** al contexto rural. Entre ellas destaca la plataforma **BICO**, una billetera digital que permite realizar pagos, consultar saldos y recibir transferencias mediante un teléfono celular básico. También se ha implementado el sistema **MoviAgro**, que permite a asesores rurales del banco gestionar aperturas de cuentas, solicitudes de crédito y registros de usuario directamente en campo, con conexión satelital o asincrónica.

Estas herramientas, aunque aún incipientes en algunas zonas de Buenaventura, han mostrado su potencial transformador. Especialmente en los corregimientos con conectividad intermitente o limitada, han permitido reducir costos de transacción, evitar traslados innecesarios y acercar los servicios financieros a mujeres, jóvenes y organizaciones comunitarias que históricamente han estado por fuera del sistema formal (FAO, 2022).

Así, el Banco Agrario no ha limitado su presencia territorial a oficinas o cajeros. Ha construido una **red flexible, descentralizada y comunitaria** que combina lo digital con lo humano, y que entiende que llegar al territorio es, sobre todo, una forma de reconocerlo.

5. Impacto local y testimonios comunitarios

El impacto del Banco Agrario en Buenaventura no se limita a indicadores financieros ni a cifras de cartera colocada. Su presencia ha tenido efectos profundos, aunque muchas veces silenciosos, en la vida económica, social y organizativa de las comunidades. En territorios históricamente afectados por la desconfianza institucional, el banco ha logrado —a través de acciones cotidianas, programas flexibles y relaciones duraderas— generar

formas de legitimidad que van más allá de lo bancario.

Líderes comunales del Bajo Calima y de corregimientos como La Gloria, Zacarías y San Cipriano coinciden en afirmar que la llegada del Banco Agrario fue clave para que muchas organizaciones pudieran dar un salto hacia la formalidad: acceder a personería jurídica, obtener registros contables, abrir cuentas colectivas y postularse a recursos de cooperación nacional e internacional (PNUD, 2020). Gracias a ello, asociaciones de pescadores artesanales, grupos de mujeres cultivadoras, y colectivos juveniles dedicados al turismo comunitario han podido consolidar emprendimientos en cadenas de valor como el pescado fresco, la transformación de frutas nativas, el cacao artesanal o las experiencias turísticas culturales.

Uno de los programas más emblemáticos ha sido el de **Mujer Emprendedora Rural**, impulsado con acompañamiento técnico de la cooperación internacional y organizaciones locales. Testimonios recogidos por el Banco Agrario (2021) muestran cómo, con microcréditos de bajo monto, tasas preferenciales y formación básica en gestión de negocios, muchas mujeres han logrado fortalecer unidades productivas de panadería, confección, cosmética natural con plantas

locales y servicios gastronómicos. Para muchas de ellas, acceder al crédito no fue solo una solución financiera, sino una puerta simbólica de entrada a un mundo que por mucho tiempo les había sido ajeno: el mundo de la confianza institucional y de la autonomía económica.

En zonas costeras y fluviales, los efectos han sido igualmente significativos. Créditos dirigidos a cooperativas de pesca artesanal han permitido la compra de motores fuera de borda, sistemas de refrigeración y lanchas colectivas con licencias de operación. Esto no solo mejoró la rentabilidad de la actividad pesquera, sino que redujo la dependencia de intermediarios informales y abrió nuevos espacios para la asociatividad productiva. El acceso a estos recursos ha facilitado el cumplimiento de normativas sanitarias, el aumento de ingresos familiares y la posibilidad de comercializar en circuitos más estables (Garay, 2015).

Además del crédito, el Banco Agrario ha impulsado una política de fortalecimiento institucional basada en el trabajo con organizaciones de base. Ha organizado foros regionales sobre inclusión financiera, ha firmado convenios con juntas de acción comunal para el uso de espacios comunitarios como puntos de atención itinerantes, y ha participado activamente en mesas interinstitucionales de planeación con enfoque étnico. En un territorio

donde otras instituciones del Estado tienden a ser intermitentes o inoperantes, estas acciones han contribuido a reforzar la confianza ciudadana y a construir lo que algunos líderes locales llaman "pedacitos de Estado que sí funcionan".

Particularmente valioso ha sido el trabajo con víctimas del conflicto armado y comunidades afectadas por el desplazamiento forzado. A través de líneas de crédito con enfoque reparador —que combinan acceso a recursos, periodos de gracia ampliados y acompañamiento técnico— se ha logrado que muchas familias retornen a sus territorios o reconstruyan sus medios de vida sin caer en ciclos de endeudamiento precario. Según informes de Prosperidad Social (2022), estos programas han sido fundamentales para conectar la política de reparación con oportunidades reales de reincorporación económica y arraigo territorial.

En suma, el impacto del Banco Agrario en Buenaventura debe entenderse no solo como el de una entidad financiera que presta servicios, sino como el de un actor público que ha sabido construir vínculos. Sus acciones han tejido confianza, han dado estabilidad a procesos organizativos y han generado capital social en una ciudad marcada por el abandono estructural, la pobreza y la violencia. En muchos

casos, el banco no ha sido el único actor estatal presente. Pero ha sido —con frecuencia— el más constante.

6. Conclusiones: presencia estatal en clave de justicia territorial

El caso de Buenaventura demuestra que el Banco Agrario no es simplemente un prestador de servicios financieros, sino un actor fundamental en la construcción de institucionalidad democrática en territorios históricamente excluidos. Su papel como financiador, capacitador, articulador de actores y operador de política pública lo posiciona como una herramienta clave para la equidad territorial.

No obstante, el desafío de consolidar una verdadera inclusión financiera en Buenaventura implica superar la brecha digital, mejorar la infraestructura de conectividad, ampliar las líneas de crédito para economía popular urbana y rural, y profundizar el enfoque étnico y comunitario en el diseño de productos.

El Banco Agrario tiene el potencial de convertirse en un modelo de banca pública con enfoque territorial, intercultural y de género. En un contexto de implementación de acuerdos de paz, reforma rural y transición hacia una economía solidaria, su rol puede ser

determinante para cerrar brechas, generar empleo digno y fortalecer las capacidades productivas del Pacífico colombiano.

Capítulo V. El Banco Agrario y la inclusión financiera rural en Colombia

1. Introducción: la inclusión financiera como política de Estado

Hablar de inclusión financiera hoy no es hablar solamente de un tema técnico o sectorial. Es hablar de derechos, de democracia económica, y de la posibilidad real de que las personas —especialmente en contextos rurales, étnicos y empobrecidos— puedan construir proyectos de vida autónomos, sostenibles y dignos. Durante las últimas dos décadas, Colombia ha incorporado la inclusión financiera como un eje prioritario en sus políticas públicas de desarrollo social, rural y económico, reconociendo que el acceso efectivo a servicios financieros básicos es una condición indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía económica (BID, 2017; DNP, 2022).

Cuando una persona puede ahorrar formalmente, acceder a un crédito justo, proteger sus ingresos con un seguro, o realizar pagos sin depender de intermediarios informales, no solo mejora su calidad de vida: también gana margen de decisión sobre su futuro. La inclusión financiera, entonces, no es solo una meta bancaria. Es una herramienta de

equidad. Es una forma de redistribuir oportunidades, de ampliar libertades, de reconocer capacidades productivas históricamente invisibilizadas (Sen, 1999).

En los territorios rurales de Colombia —donde confluyen la pobreza estructural, el rezago estatal y la desigualdad territorial— esta dimensión se vuelve aún más urgente. Allí, la exclusión financiera no es una anécdota: es la norma. Muchos hogares rurales dependen de ingresos informales, no tienen garantías para acceder a crédito, desconocen cómo funciona el sistema financiero o simplemente no cuentan con la infraestructura para conectarse a él. En estas zonas, la informalidad no es una elección, sino una condición impuesta por décadas de abandono institucional (González, 2019; PNUD, 2020).

Por ello, la inclusión financiera rural adquiere una dimensión estratégica: no solo impulsa la actividad económica, sino que fortalece procesos de desarrollo territorial, cohesión social, acceso a derechos y construcción de paz. Facilita la inversión productiva campesina, mejora la planificación familiar, estimula el emprendimiento local, permite enfrentar riesgos climáticos o económicos, y otorga independencia —en especial a mujeres y jóvenes— frente a mecanismos de crédito informal, extractivo o violento (FAO, 2022).

En este contexto, el Banco Agrario de Colombia ha desempeñado un papel fundamental. Como institución financiera pública con cobertura nacional y orientación social, se ha convertido en el principal canal de acceso al sistema financiero formal para millones de personas rurales. Ha llegado allí donde otras entidades —por motivos de rentabilidad, riesgo o infraestructura— no han querido o no han podido llegar. Y lo ha hecho combinando servicios financieros clásicos con programas sociales, herramientas tecnológicas y un enfoque diferenciado que reconoce las realidades del campo colombiano.

Este capítulo analiza de manera integral el papel del Banco Agrario en el avance de la inclusión financiera rural en Colombia. Examina sus estrategias, instrumentos, resultados y tensiones. Pero sobre todo, busca comprender cómo la inclusión financiera —cuando se hace con justicia territorial y sensibilidad social— puede convertirse en una herramienta real de transformación, autonomía y dignidad para millones de personas en los márgenes. Porque hablar de inclusión no es solo hablar de acceso: es hablar de pertenencia, de reconocimiento y de ciudadanía.

2. Brechas estructurales de inclusión financiera en el campo colombiano

Aunque Colombia ha hecho esfuerzos significativos en materia de inclusión financiera en la última década, las cifras siguen revelando una profunda desigualdad entre el acceso en zonas urbanas y rurales. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia (2022), más del 90 % de la población urbana tiene acceso a al menos un producto financiero formal, mientras que en las zonas rurales ese porcentaje ronda apenas el 58 %, y cae aún más cuando se mide el uso activo y sostenido de estos servicios. Es decir, la brecha ya no es solo de acceso formal, sino —y sobre todo— de acceso funcional.

Lo que en muchos casos se registra como "inclusión" termina siendo una bancarización superficial. Numerosos usuarios rurales tienen una cuenta bancaria solo para recibir subsidios estatales, pero no ahorran, no acceden a créditos, no utilizan seguros y, en muchos casos, desconocen cómo funcionan los productos que han contratado. Esta situación es conocida como "inclusión pasiva" o "subutilización financiera", un fenómeno ampliamente documentado en América Latina (Demirgüç-Kunt et al., 2018; RIMISP, 2021).

Las razones de este rezago son múltiples y estructurales. En primer lugar, la **dispersión**

geográfica y la baja densidad poblacional hacen que los costos operativos de llevar servicios financieros a zonas rurales sean elevados. Las entidades privadas, guiadas por lógicas de rentabilidad, encuentran poco incentivo en abrir oficinas o instalar cajeros en comunidades donde el volumen de operaciones es bajo y los costos de infraestructura son altos (Clamara & Tuesta, 2014).

En segundo lugar, **las deficiencias en conectividad digital** dificultan el acceso a herramientas como la banca móvil, los pagos electrónicos o las plataformas de educación financiera en línea. Según datos del DANE (2021), solo el 27 % de los hogares rurales cuentan con conexión estable a internet, lo que impide que puedan beneficiarse de la digitalización del sistema financiero. Esta brecha tecnológica afecta especialmente a jóvenes, mujeres y personas mayores en zonas apartadas.

En tercer lugar, **la baja alfabetización financiera** limita la comprensión y el uso efectivo de los productos bancarios. Como señala Lusardi & Mitchell (2014), las decisiones financieras requieren habilidades básicas de cálculo, planificación y evaluación de riesgos. En zonas rurales, donde los niveles de escolaridad son más bajos y donde muchas personas tienen experiencias previas de abuso financiero, la

desconfianza hacia las instituciones es una barrera adicional difícil de romper.

A estas limitaciones estructurales se suman **condiciones interseccionales** que agravan la exclusión. Las mujeres rurales, por ejemplo, enfrentan barreras específicas: menor acceso a la propiedad de la tierra, a ingresos autónomos y a garantías crediticias (FAO, 2022). Esto las excluye de los esquemas tradicionales de crédito que exigen garantías hipotecarias o patrimoniales. Los jóvenes rurales, por su parte, se enfrentan a restricciones generacionales, falta de historial crediticio y escasas oportunidades de capacitación financiera. Y en el caso de comunidades indígenas y afrodescendientes, la exclusión se entrecruza con la discriminación estructural, la falta de productos adecuados culturalmente y la desconfianza acumulada por décadas de invisibilización institucional (González, 2019; PNUD, 2020).

Estas brechas no son meramente técnicas. Son reflejo de un modelo económico y financiero que, durante mucho tiempo, ha funcionado de espaldas a los territorios rurales. No solo limitan el acceso a servicios: también **reproducen ciclos de pobreza, informalidad y dependencia**, profundizando las desigualdades históricas en lugar de cerrarlas. La inclusión financiera, si quiere ser efectiva, debe reconocer

estas desigualdades de origen y diseñar estrategias que partan de una comprensión profunda del territorio, sus dinámicas, y las múltiples formas en que las personas se relacionan con el dinero, la confianza y el futuro.

3. Instrumentos del Banco Agrario para promover la inclusión financiera

Frente a estos desafíos, el Banco Agrario ha diseñado e implementado una serie de instrumentos estratégicos para ampliar el acceso, el uso y la apropiación de los servicios financieros por parte de la población rural:

Red física y territorial: con más de 790 oficinas, 130 puntos extendidos y más de 10.000 corresponsales bancarios, el Banco cubre el 99 % del territorio nacional. Esta capilaridad lo convierte en el único banco en al menos 470 municipios del país, muchos de ellos con alta ruralidad y población étnica dispersa.

Canales digitales y móviles: herramientas como la banca móvil, la billetera digital BICO y el programa MoviAgro permiten realizar transacciones financieras, firmar contratos y acceder a productos desde teléfonos celulares o tabletas, incluso en zonas con conectividad limitada. Estos canales han facilitado la inclusión de jóvenes y mujeres emprendedoras en regiones apartadas.

Productos con enfoque diferencial: se han desarrollado líneas específicas para mujeres rurales (con tasas blandas, períodos de gracia y acompañamiento técnico), jóvenes rurales (primer crédito, mentorías) y asociaciones comunitarias (crédito asociativo y garantías grupales). Además, el banco ofrece microcréditos productivos, cuentas de ahorro simplificadas, leasing agropecuario y seguros vinculados al crédito, adaptados a realidades rurales.

Integración con programas sociales: el banco opera como dispersor de subsidios estatales (Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA), utilizando sus canales físicos y digitales para bancarizar a millones de personas sin historial financiero. Este modelo ha facilitado la transición de la informalidad hacia la inclusión financiera formal.

Educación financiera y acompañamiento: a través de alianzas con el SENA, el Ministerio de Agricultura, Prosperidad Social y entidades locales, el banco ha impulsado jornadas de educación financiera, capacitación en derechos financieros y formación en uso responsable del crédito y del ahorro, fortaleciendo la autonomía económica de las comunidades rurales.

4. Resultados e impactos en la última década

Entre 2010 y 2020, el Banco Agrario ha reportado avances notables en inclusión financiera rural:

Crecimiento de la base de clientes: superó los 3 millones de usuarios rurales activos, de los cuales un alto porcentaje corresponde a mujeres, jóvenes y pequeños productores.

Cobertura territorial: está presente en el 99 % de los municipios colombianos y mantiene oficinas exclusivas en cerca de 470 municipios, siendo la única opción bancaria para miles de hogares rurales.

Liderazgo en crédito agropecuario: concentra más del 65 % del crédito agropecuario de primer piso del país (Finagro, 2020), especialmente en microcréditos, crédito asociativo y proyectos de economía popular.

Inclusión de poblaciones específicas: se ha incrementado en más del 120 % la colocación de crédito a mujeres rurales y en más del 70 % a jóvenes emprendedores rurales, mediante productos adaptados y campañas territoriales.

Más allá de los indicadores cuantitativos, el impacto cualitativo es significativo. Estudios del BID (2017) y de Fedesarrollo (Steiner, 2011) muestran que la inclusión financiera está

correlacionada con mayor inversión productiva, diversificación de ingresos, reducción de prácticas de usura (“gota a gota”) y fortalecimiento de redes económicas locales. También se ha documentado un efecto positivo en la autonomía de las mujeres, la permanencia de los jóvenes en el campo y la formalización de la economía campesina.

5. Desafíos pendientes y perspectivas futuras

Pese a estos logros, el Banco Agrario y la política pública de inclusión financiera enfrentan retos estructurales que deben ser abordados para consolidar una inclusión profunda, sostenible y transformadora:

Inclusión funcional y sostenible: no basta con abrir cuentas o entregar créditos. Es necesario garantizar que los usuarios hagan un uso activo, informado y beneficioso de los productos financieros. Esto implica reforzar los procesos de formación, seguimiento y acompañamiento.

Adaptación territorial y cultural: los instrumentos financieros deben adaptarse a las dinámicas económicas, culturales y sociales de los territorios. La inclusión financiera con enfoque diferencial exige diseñar productos para comunidades étnicas, víctimas del conflicto y poblaciones en transición económica.

Infraestructura y conectividad: la brecha digital sigue siendo un obstáculo. Asegurar conectividad, acceso a dispositivos y capacitación digital es esencial para avanzar hacia una banca digital verdaderamente incluyente.

Blindaje institucional y autonomía técnica: se requiere proteger al Banco Agrario de presiones políticas, garantizar su sostenibilidad financiera y fortalecer sus capacidades de innovación y evaluación de impacto.

A futuro, el Banco Agrario puede consolidarse como el eje articulador de un ecosistema financiero rural que no solo preste servicios, sino que promueva desarrollo con equidad. Su papel en la implementación de los PDET, la reforma rural integral, el impulso de la economía popular y solidaria, y la transición agroecológica será clave para una inclusión que no sea solo bancaria, sino estructural.

Capítulo VI. Retos estructurales y perspectivas futuras del Banco Agrario

1. Introducción: el dilema de la banca pública con función social

La experiencia del Banco Agrario de Colombia, desde su creación en 1999 hasta su consolidación como el principal instrumento financiero en el ámbito rural, ha demostrado que es posible articular eficiencia operativa con objetivos sociales. Sin embargo, este logro no lo exime de enfrentar retos estructurales persistentes que amenazan con limitar su capacidad transformadora. En un contexto marcado por la desigualdad territorial, la concentración de la tierra, el cambio climático, las presiones de mercado y las demandas sociales emergentes, el Banco Agrario debe redefinir su estrategia de largo plazo para mantener su legitimidad, sostenibilidad y pertinencia como banca pública.

Este capítulo analiza los principales desafíos operativos, financieros, institucionales y políticos que enfrenta el Banco Agrario en el siglo XXI, y propone una agenda de futuro para una banca rural pública adaptada a los nuevos escenarios del desarrollo sostenible, la

economía popular, la equidad territorial y la paz total.

2. Desafíos estructurales persistentes

a. Dualidad entre sostenibilidad financiera y misión social

La tensión entre sostenibilidad financiera y misión social es una constante en las instituciones de banca pública. Según Armendáriz y Morduch (2010), este dilema radica en que las entidades orientadas al desarrollo deben atender a poblaciones de alto riesgo crediticio sin sacrificar su viabilidad económica. En el caso del Banco Agrario, esta tensión se manifiesta en la presión por reportar indicadores financieros sólidos ante la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda, lo cual puede inducir una "financiarización" de su misión, desplazando progresivamente a los segmentos menos rentables.

Superar esta tensión implica rediseñar la estructura de incentivos internos, crear mecanismos de compensación por atender zonas de difícil acceso (como subsidios cruzados o fondos de fomento) y reformular el balance entre rentabilidad y valor social agregado (Cheston & Kuhn, 2002).

b. Brechas tecnológicas y cobertura desigual

A pesar de los avances en digitalización (MoviAgro, BICO, banca móvil), persisten barreras estructurales de conectividad en muchas zonas rurales. La falta de acceso a internet, electricidad y dispositivos limita la expansión de la banca digital. Según el DNP (2022), más del 40 % de los corregimientos rurales carecen de conectividad estable, y la brecha de acceso a tecnologías móviles supera el 35 % en comunidades afrodescendientes e indígenas.

Autores como Castells (2010) y Hilbert (2011) advierten que esta "brecha digital" no solo implica desigualdad de acceso, sino de capacidades para usar, apropiarse y beneficiarse de la tecnología. En este sentido, el Banco Agrario debe promover un modelo de innovación rural que combine infraestructura, alfabetización digital y adecuación cultural de las herramientas.

c. Cultura financiera insuficiente

El bajo nivel de alfabetización financiera en muchas zonas rurales impide el uso efectivo y sostenido de los productos financieros. Como señalan Lusardi y Mitchell (2014), la educación financiera está directamente correlacionada con la estabilidad económica, la capacidad de ahorro

y la toma de decisiones informadas. Sin embargo, en Colombia solo el 28 % de la población rural ha recibido algún tipo de formación financiera formal (Banca de las Oportunidades, 2020).

Frente a este panorama, el Banco Agrario debe diseñar estrategias educativas interculturales, integradas a los procesos comunitarios y basadas en pedagogías participativas, en alianza con instituciones locales, universidades rurales y organizaciones sociales. La inclusión financiera sin formación es una forma de reproducción de desigualdades.

d. Riesgos de politización y captura institucional

Aunque el Banco Agrario ha avanzado en profesionalización y gobierno corporativo, sigue siendo una empresa estatal y, como tal, vulnerable a presiones políticas. Grindle (2012) sostiene que la "captura institucional" se produce cuando el interés público es reemplazado por redes de poder clientelista, lo cual puede debilitar la misión institucional, deteriorar la confianza ciudadana y poner en riesgo su sostenibilidad.

Proteger al Banco de estas dinámicas requiere reforzar la carrera administrativa interna, blindar la alta gerencia con criterios de mérito, establecer mecanismos externos de

vigilancia ciudadana y fortalecer su autonomía presupuestal, con independencia técnica y planificación multianual.

3. Perspectivas estratégicas de largo plazo

a. Banca pública como motor de la transformación rural sostenible

El Banco Agrario puede ser un actor central en la transición hacia un modelo de desarrollo rural sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos del Acuerdo de París. Esto implica financiar proyectos de agroecología, bioeconomía, energías limpias, infraestructura hídrica y conservación de la biodiversidad productiva.

Según Stiglitz y Weiss (1981), el crédito dirigido puede corregir fallas del mercado en sectores estratégicos. Aplicado al campo colombiano, esto justifica una banca pública con función selectiva y contracíclica, que apoye iniciativas que, aunque de alto riesgo financiero, tienen alto valor social y ambiental.

b. Expansión del crédito productivo de impacto

El banco debe avanzar hacia una expansión deliberada del crédito de desarrollo productivo de impacto, orientado a transformar las condiciones de producción, comercialización y asociatividad del campesinado. Para ello, es

clave crear instrumentos financieros flexibles, con garantías no convencionales (colectivas, sociales, productivas), acompañamiento técnico-financiero y mecanismos de alivio en casos de crisis climática o de mercado.

Experiencias de banca de desarrollo en Asia y África (como el NABARD en India o el Agricultural Bank of Kenya) muestran que el impacto es mayor cuando el crédito se integra con servicios de extensión rural, mercados justos y redes comunitarias de aprendizaje.

c. Fortalecimiento de la banca digital rural

La digitalización del banco debe superar la lógica de eficiencia interna y avanzar hacia un modelo centrado en la inclusión, la accesibilidad y la apropiación comunitaria. Esto implica desarrollar soluciones tecnológicas que funcionen offline, tengan interfaces intuitivas, estén disponibles en lenguas indígenas y se complementen con puntos físicos de apoyo técnico.

Autores como Heeks (2009) destacan que la tecnología inclusiva no es solo una cuestión de diseño, sino de gobernanza: quién participa en su construcción, con qué lógica y para qué fines. El Banco Agrario debe liderar un enfoque de innovación tecnológica con base comunitaria.

d. Participación comunitaria y control ciudadano

Una banca pública del siglo XXI debe ser democrática, transparente y corresponsable. Esto significa incorporar mecanismos reales de participación de las comunidades rurales en la definición de prioridades, evaluación de servicios, diseño de productos y vigilancia del cumplimiento de metas sociales.

Experiencias como los "consejos de usuarios rurales" en Ecuador o los bancos comunales en Perú muestran que la gobernanza participativa mejora la legitimidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la banca pública. En Colombia, esto podría articularse con los Consejos de Planeación Territorial, las Juntas de Acción Comunal y los espacios de veeduría ciudadana.

4. Articulación con reformas estructurales: tierra, paz, transición energética

a. Reforma agraria y acceso a la tierra

El acceso al crédito es una condición indispensable para el éxito de la política de reforma agraria. El Banco Agrario debe acompañar la adjudicación de tierras con esquemas financieros adaptados a nuevos beneficiarios: líneas de crédito para inversión inicial, incentivos para capital semilla, subsidios

a la tasa de interés, seguros integrados y tutoría financiera.

La experiencia del programa de Desarrollo Rural Territorial en Brasil (PRONAF) muestra que el crédito adaptado a pequeños agricultores contribuye a la reducción de la pobreza y al arraigo territorial (Schneider et al., 2010).

b. Desarrollo productivo en zonas PDET

En los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz, el banco debe ser un agente de financiamiento de la economía para la paz. Esto implica apoyar iniciativas de sustitución de economías ilícitas, cadenas de valor campesinas, empresas sociales rurales y proyectos de infraestructura comunitaria con créditos de bajo costo y largo plazo.

Esta función debe coordinarse con la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Agricultura y los entes territoriales, integrando las metas financieras con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

c. Transición energética justa y economía popular

La lucha contra el cambio climático y la promoción de una economía social y solidaria requieren que el Banco Agrario amplíe su portafolio hacia productos verdes e inclusivos. Esto incluye créditos para energías renovables

rurales, transporte limpio, prácticas agroecológicas, conservación de ecosistemas y economía circular.

Asimismo, debe profundizar su intervención en la economía popular urbana y rural mediante esquemas de microfinanzas adaptadas, fortaleciendo el crédito a mujeres, jóvenes y comunidades étnicas que operan en condiciones de informalidad estructural.

5. Conclusión: una banca pública del siglo XXI

El Banco Agrario debe ser más que una institución financiera eficiente: debe ser un actor estratégico de justicia social, desarrollo rural y sostenibilidad territorial. Su legitimidad futura dependerá de su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas sociales, superar las barreras estructurales de inclusión y operar con transparencia, equidad y eficacia.

Una banca pública del siglo XXI debe combinar escala nacional con arraigo local, tecnología con humanidad, y solvencia financiera con propósito transformador. No basta con dar crédito; se trata de construir confianza, autonomía y poder económico en las comunidades históricamente excluidas.

Capítulo VII. Propuestas estratégicas para una banca pública del siglo XXI

1. Introducción: hacia un nuevo paradigma de banca pública rural

La banca pública rural se encuentra hoy ante una encrucijada. Por un lado, persisten retos estructurales que han condicionado su accionar durante décadas: exclusión financiera persistente, fragmentación institucional, desigualdades territoriales profundas y nuevos desafíos como la crisis climática y los desplazamientos forzados. Por otro lado, emergen oportunidades únicas para repensar su papel, su arquitectura operativa y su potencial transformador en el marco de una nueva agenda de desarrollo rural, transición energética y justicia territorial.

El Banco Agrario de Colombia, como institución estatal con presencia nacional y misión social explícita, se ubica en el centro de esa tensión. ¿Puede seguir operando bajo una lógica tradicional de intermediación financiera o debe convertirse en una plataforma de desarrollo integral? ¿Debe limitarse a prestar dinero o también facilitar redes, capacitar organizaciones, escuchar territorios y articular políticas públicas? ¿Debe medirse solo por sus

utilidades, o por su capacidad de transformar la vida de quienes han sido históricamente excluidos?

Este capítulo parte de un principio claro: la banca pública del siglo XXI no puede seguir pensándose como una versión estatal del modelo bancario comercial. Necesita asumir un nuevo paradigma, donde la lógica de desarrollo, participación comunitaria y sostenibilidad esté en el centro de sus decisiones.

Desde esa perspectiva, proponemos un conjunto de estrategias que buscan transformar el Banco Agrario en una institución territorialmente inteligente, éticamente comprometida y socialmente eficaz. No como una utopía financiera, sino como una herramienta realista, adaptada a las condiciones de Colombia, capaz de articular los recursos del Estado con las capacidades organizativas de las comunidades.

En lugar de ser una fuente de crédito fragmentaria, esta banca debe ser articuladora de políticas, dinamizadora de economías locales, constructora de ciudadanía económica y garante de presencia estatal con dignidad. Porque una banca pública sin propósito transformador es apenas una copia burocrática del mercado. Y el país necesita mucho más que eso.

2. Fortalecer la banca con enfoque territorial

Uno de los aprendizajes centrales de los enfoques de desarrollo territorial (Schejtman & Berdegué, 2004) es que los instrumentos financieros no pueden operar de forma homogénea. La realidad rural es profundamente diversa, y por eso el Banco Agrario debe actuar con criterios de descentralización inteligente y pertinencia cultural.

- **Descentralización operativa:** esto permitiría que las oficinas regionales tengan autonomía para decidir sobre líneas prioritarias, aprobar proyectos estratégicos, y responder con rapidez y contexto a emergencias o coyunturas productivas locales (De Janvry & Sadoulet, 2004).
- **Mapeo y priorización territorial:** empleando tecnologías de análisis geoespacial y análisis multicriterio, el Banco puede construir mapas de riesgo social, financiero y climático, que orienten una acción focalizada en zonas de mayor exclusión o potencial productivo.
- **Programas con enfoque étnico y comunitario:** experiencias como el Bansefi en México (Rojas-Suárez, 2010) muestran que una banca culturalmente

sensible mejora el acceso y la permanencia de los usuarios. Esto implica usar las lenguas indígenas, trabajar con autoridades tradicionales y co-diseñar productos financieros.

3. Articular servicios financieros con ecosistemas de desarrollo rural

El acceso al crédito se potencia cuando se vincula a un ecosistema de apoyos técnicos, sociales y organizativos. La idea de servicios financieros integrados ha sido ampliamente documentada por la CEPAL (2018) como uno de los pilares para el desarrollo rural inclusivo.

- **Crédito más servicios:** debe articularse con asistencia técnica, planes de negocios, comercialización y encadenamientos rurales. Sin esta combinación, el crédito puede convertirse en una carga, más que en una oportunidad.
- **Cadenas de valor incluyentes:** el Banco puede jugar un papel como coordinador financiero de nodos críticos en las cadenas rurales: plantas de transformación, acopios, logística y transporte. Esta visión va más allá del productor individual y promueve una economía de redes.

- **Alianzas interinstitucionales:** deben formalizarse programas territoriales en los que el Banco sea parte de consorcios institucionales con metas compartidas, donde cada entidad aporte desde su especialidad.

4. Democratizar la gobernanza y la planificación financiera

Una banca pública moderna no puede permanecer cerrada a la deliberación ciudadana. La legitimidad institucional requiere transparencia, participación y control social (Fox, 2007).

- **Presupuestos participativos rurales:** permiten vincular el conocimiento territorial de las comunidades con la planificación estratégica del banco. Esta práctica ha sido utilizada con éxito en Brasil y Perú para orientar inversiones públicas con legitimidad comunitaria.
- **Consejos ciudadanos de seguimiento:** su función no es solo fiscalizadora, sino también pedagógica. Permiten formar ciudadanía crítica, fortalecer la confianza institucional y prevenir la captura clientelista.
- **Transparencia proactiva:** se debe avanzar hacia una "finanza abierta", con

información disponible en tiempo real sobre créditos, montos, beneficiarios y tasas. La herramienta "Transparencia Presupuestaria" de México puede servir como modelo.

5. Innovar en instrumentos financieros para el cambio estructural

Las nuevas demandas rurales requieren nuevos instrumentos financieros. Aquí, la creatividad institucional debe estar al servicio del bien común.

- **Fondos rotatorios comunitarios:** iniciativas como los "Fondos Solidarios" de Bolivia o los "bancos comunales" en Perú han mostrado gran eficacia cuando las comunidades manejan colectivamente el capital con reglas claras y acompañamiento técnico.
- **Bonos de impacto rural:** ya existen experiencias en América Latina (Chile, Colombia) sobre bonos temáticos vinculados a impacto ambiental o social. El Banco podría ser emisor de estos bonos, ligados a resultados medibles en inclusión financiera, empleo o sostenibilidad.
- **Microseguros agroclimáticos y productos verdes:** en un contexto de

variabilidad climática, estos seguros deben cubrir eventos cada vez más frecuentes como sequías, lluvias intensas o plagas. La combinación de productos financieros verdes con educación ambiental comunitaria refuerza la resiliencia.

6. Consolidar un modelo de banca digital campesina

La digitalización no debe implicar deshumanización. Debe ser apropiada, contextual y accesible (Heeks, 2009).

- **Alfabetización digital comunitaria:** se requiere una pedagogía horizontal, que parta de la experiencia del usuario, que incorpore los ritmos y códigos locales, y que sea acompañada de confianza institucional. Sin mediación humana, la tecnología puede aislar en vez de empoderar.
- **Tecnologías apropiadas:** deben estar diseñadas para contextos de baja conectividad, dispositivos básicos, y usuarios con bajo nivel de escolaridad. Se sugiere usar códigos visuales, audio interactivo y opciones multilingües.
- **Hibridación físico-digital:** el banco debe fortalecer su red de presencia territorial

con asesores rurales, kioscos digitales, y brigadas móviles que acompañen la apropiación tecnológica.

7. Proyectar al Banco Agrario como modelo regional de banca pública

Colombia tiene una oportunidad histórica de liderar un modelo de banca pública rural con enfoque social en América Latina.

- **Cooperación Sur-Sur:** más allá de acuerdos protocolares, se deben construir redes de aprendizaje entre pares institucionales. Las experiencias de BancoEstado en Chile o BNDES en Brasil pueden inspirar procesos de aprendizaje adaptativo.
- **Centro de innovación financiera rural:** esta instancia puede actuar como laboratorio de ideas, centro de formación, y red de investigación aplicada. Podría desarrollar nuevos productos, hacer pruebas piloto y evaluar impactos.
- **Sistema de evaluación de impacto social:** debe ser independiente, metodológicamente robusto y participativo. El uso de metodologías mixtas (cuantitativas y cualitativas) permitirá entender no solo cuánto se

presta, sino para qué y con qué resultados sociales.

8. Conclusión: banca pública transformadora

El momento histórico actual exige que el Banco Agrario se piense a sí mismo no solo como operador financiero, sino como arquitecto de desarrollo territorial con justicia social. Esto implica repensar sus metas, sus herramientas, su relación con las comunidades y su marco ético.

Una banca pública transformadora no debe tener miedo a innovar, ni a ceder control, ni a democratizar su planificación. Por el contrario, debe entender que su poder institucional es más legítimo cuando se ejerce en red, con otros actores, y al servicio del bien común.

Si Colombia quiere construir paz, sostenibilidad y equidad desde los territorios, necesita un Banco Agrario valiente, inclusivo y profundamente humano.

Capítulo VIII. Conclusiones generales: una banca pública para la equidad territorial

1. Introducción: balance de una experiencia transformadora

A lo largo de esta obra hemos recorrido la historia institucional, el papel territorial y la evolución de la banca pública rural en Colombia, con énfasis en el Banco Agrario y su presencia en regiones clave como Buenaventura. Lejos de ser solo un actor del sistema financiero, esta entidad se ha consolidado como uno de los pocos instrumentos con que el Estado ha podido materializar su presencia en territorios marcados por el abandono, la informalidad y la desconfianza institucional. Su trayectoria no puede entenderse únicamente desde la lógica bancaria: debe leerse también desde la política pública, la equidad territorial y la justicia económica.

El Banco Agrario ha sido —con todas sus tensiones, contradicciones y aprendizajes— el intento más duradero del Estado colombiano por construir una institucionalidad financiera con función social. A diferencia de la banca privada, que históricamente ha evitado los territorios rurales por su baja rentabilidad, la banca pública ha actuado allí donde se requiere

no solo crédito, sino reconocimiento, presencia y vínculo. En este sentido, el Banco Agrario ha representado un puente entre las comunidades y un Estado que muchas veces ha sido más una promesa que una realidad.

Durante el recorrido de este libro, hemos analizado cómo esta banca ha evolucionado desde sus raíces en la Caja Agraria —una institución ambivalente, paternalista y altamente politizada— hacia un modelo más técnico, territorializado y con vocación de permanencia. Pero también hemos mostrado que esa transición no ha sido lineal ni exenta de dificultades. El equilibrio entre sostenibilidad financiera y misión pública, entre rentabilidad y equidad, sigue siendo una tensión permanente en su operación.

En contextos como el de Buenaventura, este banco ha significado mucho más que un proveedor de crédito: ha sido símbolo de institucionalidad funcional, canal de políticas sociales, plataforma de emprendimientos comunitarios, y referente de confianza. En zonas donde el Estado es intermitente y las oportunidades escasas, el Banco Agrario se ha convertido —como reconocen líderes comunitarios, mujeres rurales y jóvenes emprendedores— en uno de los pocos rostros visibles y constantes de lo público.

En suma, esta introducción al capítulo final no pretende cerrar la discusión, sino abrir nuevas preguntas: ¿Cómo consolidar una banca pública que no pierda su alma social en el camino de la eficiencia? ¿Cómo blindarla frente a los ciclos políticos y fortalecer su autonomía institucional? ¿Cómo hacerla más participativa, intercultural y transformadora? Porque si algo ha mostrado esta experiencia, es que la banca pública —bien pensada y mejor acompañada— puede ser uno de los pilares más sólidos de una nueva institucionalidad estatal con justicia territorial.

2. Lecciones históricas: del paternalismo a la corresponsabilidad

El recorrido histórico, desde la Caja Agraria hasta el Banco Agrario, nos deja valiosas lecciones. La primera es que la banca pública no es invulnerable: puede colapsar si se convierte en botín político, si pierde el vínculo con sus usuarios reales o si su lógica de operación desconoce las realidades de los territorios. El caso de la Caja Agraria mostró los riesgos del paternalismo estatal, de un modelo que entendía el crédito como dádiva y no como derecho. Su politización excesiva, la baja eficiencia operativa y la ausencia de controles condujeron a su liquidación.

En cambio, el Banco Agrario ha intentado construir una nueva institucionalidad basada en la eficiencia técnica, la cobertura territorial y la innovación. Sin embargo, esta transición también ha enfrentado el riesgo de alejarse de su misión social en nombre de la rentabilidad. La lección es clara: el equilibrio entre sostenibilidad financiera y equidad social es posible, pero requiere reglas claras, autonomía técnica y participación ciudadana.

3. Logros del Banco Agrario en inclusión y presencia territorial

Durante más de dos décadas, el Banco Agrario ha mantenido presencia institucional en el 99 % de los municipios colombianos, ha sido pionero en la digitalización de servicios rurales y ha desarrollado productos con enfoque diferencial para mujeres, jóvenes y comunidades rurales organizadas. Su papel como operador de programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor o Renta Ciudadana ha permitido que millones de hogares tengan por primera vez una cuenta bancaria, ahorren, accedan a créditos y participen en la economía formal.

En zonas como Buenaventura, donde el Estado llega con dificultad, el banco ha sido un referente. Allí ha financiado cooperativas pesqueras, grupos de mujeres

afroemprendedoras, jóvenes rurales y asociaciones campesinas. Más allá de los indicadores financieros, lo que se ha consolidado es una relación de confianza entre comunidad y Estado, mediada por una institución financiera pública que opera con rostro humano.

4. Retos persistentes: brechas, riesgos y tensiones

Pese a los avances, el Banco Agrario enfrenta múltiples desafíos. Persisten brechas de inclusión funcional: millones de personas acceden a productos financieros pero no los usan de manera sostenible. La brecha digital impide que la transformación tecnológica llegue a quienes más la necesitan. También hay tensiones entre los objetivos de rentabilidad y la obligación de atender territorios de baja rentabilidad pero alto valor social. Además, subsisten riesgos de politización y captura institucional que amenazan con desvirtuar su vocación transformadora.

Un reto estratégico es pasar de una lógica bancaria tradicional a un enfoque sistémico: el crédito no puede ser entendido como un fin en sí mismo, sino como parte de un entramado de relaciones territoriales que deben ser fortalecidas. La inclusión financiera no debe limitarse a la apertura de una cuenta o la

aprobación de un préstamo. Debe ser una herramienta para la emancipación económica, la construcción de proyectos de vida y el desarrollo territorial con justicia.

5. Hacia una banca pública del siglo XXI: visión transformadora

Pensar una banca pública del siglo XXI implica asumirla como actor clave de políticas públicas y no como simple empresa financiera. Requiere un nuevo paradigma que articule cinco principios fundamentales:

- **Territorialización:** el banco debe ser capaz de leer, interpretar y actuar desde la lógica de cada territorio, superando los modelos homogéneos.
- **Participación ciudadana:** la planeación, el monitoreo y la evaluación deben hacerse con las comunidades, no para ellas.
- **Innovación con justicia:** la transformación digital debe estar al servicio de la inclusión, no de la exclusión.
- **Transparencia radical:** la información debe ser pública, entendible y trazable.
- **Propósito transformador:** el objetivo debe ser el bienestar colectivo, no solo la viabilidad financiera.

Esta visión requiere, además, una arquitectura institucional más abierta, alianzas intersectoriales fuertes y una ética pública basada en el respeto, la eficiencia y la empatía.

6. Recomendaciones finales

1. **Descentralizar con inteligencia:** crear gerencias regionales con autonomía operativa que respondan al contexto.
2. **Codiseñar productos con comunidades:** no imponer soluciones, sino construirlas desde el diálogo de saberes.
3. **Evaluar con impacto:** dejar de medir únicamente colocación y empezar a medir bienestar generado.
4. **Blindar al banco de la politiquería:** adoptar reglas meritocráticas, mecanismos de vigilancia ciudadana y gestión por resultados.
5. **Formar asesores rurales integrales:** técnicos con vocación social, capacidad pedagógica y arraigo territorial.
6. **Innovar con propósito:** desarrollar plataformas tecnológicas que funcionen en zonas sin conectividad, pensadas desde y para los usuarios rurales.

7. Cierre: un banco con rostro humano

El Banco Agrario ha recorrido un largo camino. Hoy no es solo un banco: es una de las pocas instituciones del Estado que ha sabido ganarse la confianza de los territorios. Su desafío es no conformarse con lo logrado, sino seguir avanzando hacia una banca pública profundamente democrática, justa y transformadora. En un país herido por el conflicto, marcado por la desigualdad y lleno de esperanzas, la banca pública no puede ser neutral. Debe tomar partido por la dignidad, la equidad y la vida. Ese es su verdadero patrimonio, y también su mayor responsabilidad.

Referencias bibliográficas

Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The Economics of Microfinance*. Cambridge: MIT Press.

Banca de las Oportunidades. (2020). *Informe nacional de educación financiera rural*. Bogotá: Banca de las Oportunidades.

Banco Agrario de Colombia. (2020). *Informe de gestión 2019–2020*. Bogotá: BAC.

Banco Mundial. (2020). *Banca pública y desarrollo sostenible*. Washington, D.C.: World Bank.

Bejarano, J. A. (1998). *Política agraria y desarrollo rural en Colombia: una historia crítica*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

BID. (2017). *Inclusión financiera y desarrollo rural en América Latina: evidencias y propuestas*. Washington, D.C.: BID.

Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.

CEPAL. (2018). *La institucionalidad del desarrollo territorial rural en América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL.

CEPAL. (2021). *Instituciones financieras públicas y equidad territorial*. Santiago de Chile: CEPAL.

Cheston, S., & Kuhn, L. (2002). *Empowering Women through Microfinance*. New York: UNIFEM.

Clamara, N., & Tuesta, D. (2014). *Inclusión financiera en América Latina: avances y desafíos*. BBVA Research.

DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). *Boletín de indicadores de TIC en hogares rurales*. Bogotá: DANE.

De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2004). *Toward a territorial approach to rural development*. FAO.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, D.C.: World Bank.

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida*. Bogotá: DNP.

DNP. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.

Escobar, A. (2008). *Territorios de diferencia: lugar, movimientos, vida, redes*. Bogotá: Envión.

FAO. (2022). *Finanzas rurales, equidad y sostenibilidad en América Latina*. Roma: FAO.

Finagro. (2020). *Informe de gestión 2020*. Bogotá: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.

Fox, J. (2007). *Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico*. Oxford: Oxford University Press.

Garay, L. J. (2015). *Buenaventura: entre el desarrollo económico y la exclusión social*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

González, E. (2019). *El crédito rural como instrumento de equidad: avances y retrocesos en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional.

Grindle, M. S. (2012). *Jobs for the Boys: Patronage and the State in Comparative Perspective*. Harvard University Press.

Heeks, R. (2009). *The ICT4D 2.0 Manifesto: Where Next for ICTs and International Development?* University of Manchester.

Hilbert, M. (2011). Digital gender divide or technologically empowered women in developing countries? *Women's Studies International Forum, 34*(6), 479–489.

Kalmanovitz, S. (2010). *Nueva historia económica de Colombia*. Bogotá: Taurus.

Kalmanovitz, S., & López, E. (2006). *La agricultura colombiana en el siglo XX*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

LeGrand, C. (1988). *Colonización y protesta campesina en Colombia (1850–1950)*. Bogotá: CEREC.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44.

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2020). *Territorios resilientes y banca pública en Colombia*. Bogotá: PNUD.

Posada, C. (1984). *Historia de las instituciones financieras en Colombia*. Medellín: Universidad de Antioquia.

Prosperidad Social. (2021). *Informe de programas sociales en el Litoral Pacífico*. Bogotá: DPS.

RIMISP. (2019). *Inclusión financiera y cohesión social rural en América Latina*. Santiago de Chile: RIMISP.

Rojas-Suárez, L. (2010). *Access to Financial Services in Latin America and the Caribbean:*

The Role of the State and the Private Sector. Washington, D.C.: CGD.

Sánchez, F., & Moreno, A. (2016). *Políticas públicas y acceso al crédito agropecuario en Colombia: evolución y desafíos*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Schejtman, A., & Berdegué, J. A. (2004). *Desarrollo territorial rural*. Santiago de Chile: RIMISP.

Schneider, S., Graziano da Silva, J., & Martins, R. (2010). *The Experience of the Brazilian Program of Support to Family Agriculture (PRONAF)*. Rome: FAO.

Steiner, R. (2011). Banca pública y desarrollo rural: ¿una contradicción? En R. Steiner (Ed.), *Retos del desarrollo financiero en Colombia* (pp. 75–100). Bogotá: Fedesarrollo.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*. *The American Economic Review, 71*(3), 393–410.

Superintendencia Financiera de Colombia. (2022). *Boletín de inclusión financiera*. Bogotá: SFC.

Urrutia, M., & Llach, L. (1999). *Colombia: un siglo de políticas económicas 1900–2000*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

Sobre el Autor

Juan Ricardo Buenaventura Asprilla Tecnólogo en Gestión Bancaria y Financiera y Administrador Financiero de Uniquindio; con magister en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira. A lo largo de su trayectoria profesional ha combinado el ejercicio técnico con una profunda sensibilidad social, desarrollando investigaciones que articulan economía, territorio e inclusión. Su compromiso con el Pacífico colombiano lo ha llevado a documentar y analizar procesos institucionales que impactan directamente la vida de las comunidades rurales y afrodescendientes. *Semillas de Progreso* es una muestra de su apuesta por construir conocimiento útil para el desarrollo equitativo y la transformación social desde los territorios.